

CUMBRE DE JOHANNESBURGO 2002

RESEÑA DE CHILE



NACIONES UNIDAS

INTRODUCCION - RESEÑAS DE LOS PAISES DEL 2002

El Programa 21, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), Río de Janeiro en 1992, subrayó el importante papel que desempeñan los Estados en la aplicación del Programa en el plano nacional. Recomendó que los Estados consideraran la posibilidad de preparar informes nacionales y que comunicaran la información en ellos contenida a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS), incluidas las actividades que desempeñen para ejecutar el Programa 21, los obstáculos y desafíos que enfrenten y otras cuestiones relativas al medio ambiente y el desarrollo que consideren pertinentes.

Como resultado, en 1993 los gobiernos comenzaron a preparar informes nacionales para presentarlos a la CDS. Después de dos años de seguir esta práctica, la CDS decidió que sería útil presentar una versión resumida de los informes nacionales que se habían presentado hasta la fecha. Posteriormente, en 1997 la secretaría de la CDS publicó la primera serie de reseñas de los países con motivo del examen quinquenal de la Cumbre para la Tierra (Río + 5). En la serie se resumieron, país por país, todos los informes nacionales presentados entre 1994 y 1996. Cada reseña abarcó el estado de cumplimiento de todos los capítulos del Programa 21.

El objetivo de las reseñas de los países es:

- Ayudar a los países a supervisar sus propio avance;
- Compartir experiencias e información con los demás; y
- Servir de memoria institucional para seguir y registrar las medidas nacionales emprendidas para ejecutar el Programa 21.

Se está publicando una segunda serie de reseñas de los países con motivo de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDs) que se celebrará en Johannesburgo del 26 de agosto al 4 de septiembre del 2002. En cada reseña se incluyen los 40 capítulos del Programa 21 y las cuestiones que la CDS ha abordado por separado desde 1997, entre ellas, el comercio, la energía, el transporte, el turismo sostenible y la industria.

La serie de reseñas de los países del 2002 proporciona el panorama más amplio hasta la fecha del estado de aplicación del Programa 21 en el plano nacional. Cada reseña se basa en la actualización de la información que figura en los informes nacionales presentados anualmente por los gobiernos.

La preparación de informes nacionales a menudo es difícil. También puede ser productiva y gratificante, ya que permite reflexionar sobre lo que se ha logrado y aumentar la comunicación, la coordinación y la cooperación entre diversos organismos, instituciones y grupos nacionales. Se espera que la información que figura en esta serie de reseñas de los países sirva como instrumento útil para aprender de las experiencias y de los conocimientos adquiridos en cada país en búsqueda del desarrollo sostenible.

NOTA A LOS LECTORES

La serie de reseñas de los programas de los países 2002 proporciona información sobre la ejecución del Programa 21 país por país y capítulo por capítulo (con la excepción de los capítulos 1 y 23, que son preámbulos). Desde la celebración de la Conferencia de Río en 1992, la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible ha abordado concretamente otros temas que no figuran como capítulos separados en el Programa 21. En consecuencia, esos temas, relativos al comercio, la industria, la energía, el transporte y el turismo sostenible, figuran como secciones separadas en las reseñas de los programas. En los casos en los que varios capítulos del Programa 21 están estrechamente relacionados entre sí, por ejemplo, los capítulos 20 a 22, que abarcan la gestión ecológicamente racional de los desechos peligrosos, sólidos y radiactivos, y los capítulos 24 a 32, que se refieren al fortalecimiento de los grupos principales, la información se incluye bajo un solo encabezamiento en la serie de reseñas de los programas. Por último, los capítulos 16 y 34, relativos a la gestión ecológicamente racional de la biotecnología, y a la transferencia de tecnología ecológicamente racional, cooperación y aumento de la capacidad, respectivamente, se presentan en un solo encabezamiento en las reseñas de los programas de los países en los casos en los que la información es relativamente escasa.

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO 2: COOPERACION INTERNACIONAL PARA ACELERAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PAISES EN DESARROLLO Y POLITICAS CONEXAS.....	1
CAPITULO 2: COOPERACION INTERNACIONAL PARA ACELERAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PAISES EN DESARROLLO Y POLITICAS CONEXAS -COMERCIO.....	3
CAPITULO 3: LUCHA CONTRA LA POBREZA.....	4
CAPITULO 4: EVOLUCION DE LAS MODALIDADES DE CONSUMO	6
CAPITULO 4: EVOLUCION DE LAS MODALIDADES DE CONSUMO - ENERGIA.....	7
CAPITULO 4: EVOLUCION DE LAS MODALIDADES DE CONSUMO - TRANSPORTE.....	8
CAPITULO 5: DINAMICA DEMOGRAFICA Y SOSTENIBILIDAD.....	9
CAPITULO 6: PROTECCION Y FOMENTO DE LA SALUD HUMANA.....	11
CAPITULO 7: FOMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HUMANOS.....	13
CAPITULO 8: INTEGRACION DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO EN LA ADOPCION DE DECISIONES.....	15
CAPITULO 9: PROTECCION DE LA ATMOSFERA.....	17
CAPITULO 10: ENFOQUE INTEGRADO DE LA PLANIFICACION Y ORDENACION DE LOS RECURSOS DE TIERRAS.....	19
CAPITULO 11: LUCHA CONTRA LA DEFORESTACION.....	20
CAPITULO 12: ORDENACION DE LOS ECOSISTEMAS FRAGILES: LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION Y LA SEQUIA.....	22
CAPITULO 13: ORDENACION DE LOS ECOSISTEMAS FRAGILES: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE MONTAÑA.....	24
CAPITULO 14: FOMENTO DE LA AGRICULTURA Y DEL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE.....	25
CAPITULO 15: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA.....	27
CAPITULOS 16 y 34: GESTION ECOLOGICAMENTE RACIONAL DE LA BIOTECNOLOGIA Y TRANSFERENCIA DE LA TECNOLOGIA, COOPERACION Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD.....	28
CAPITULO 17: PROTECCION DE LOS OCEANOS Y DE LOS MARES DE TODO TIPO, INCLUIDOS LOS MARES CERRADOS Y SEMI-CERRADOS, Y DE LAS ZONAS COSTERAS, Y PROTECCION, UTILIZACION RACIONAL Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS VIVOS.....	31
CAPITULO 18: PROTECCION DE LA CALIDAD Y EL SUMINISTRO DE LOS RECURSOS DE AGUA DULCE: APLICACION DE CRITERIOS INTEGRADOS PARA EL APROVECHAMIENTO, ORDENACION Y USO DE LOS RECURSOS DE AGUA DULCE.....	33

CAPITULO 19: GESTION ECOLOGICAMENTE RACIONAL DE LOS PRODUCTOS

QUIMICOS TOXICOS, INCLUIDA LA PREVENCION DEL TRAFICO INTERNACIONAL ILICITO DE PRODUCTOS TOXICOS Y PELIGROSOS.....	34
--	----

CAPITULOS 20 AL 22: GESTION ECOLOGICAMENTE RACIONAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS, SOLIDOS Y RADIOACTIVOS.....	36
--	----

CAPITULOS 24 AL 32: FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LOS GRUPOS PRINCIPALES.....	39
--	----

CAPITULO 33: RECURSOS Y MECANISMOS DE FINANCIACION.....	41
---	----

CAPITULO 35: LA CIENCIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.....	42
--	----

CAPITULO 36: FOMENTO DE LA EDUCACION, LA CAPACITACION Y LA TOMA DE CONCIENCIA.....	43
--	----

CAPITULO 37: MECANISMOS NACIONALES Y COOPERACION INTERNACIONAL PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD NACIONAL EN LOS PAISES EN DESARROLLO.....	44
--	----

CAPITULO 38: ARREGLOS INSTITUCIONALES INTERNACIONALES.....	45
--	----

CAPITULO 39: INSTRUMENTOS Y MECANISMOS JURIDICOS INTERNACIONALES.....	46
---	----

CAPITULO 40: INFORMACION PARA LA ADOPCION DE DECISIONES.....	48
--	----

CAPITULO: INDUSTRIA.....	49
--------------------------	----

CAPITULO: TURISMO SOSTENIBLE.....	50
-----------------------------------	----

LISTA DE SIGLAS DE USO FRECUENTE*

AEC	Asociación de los Estados del Caribe
AMCEN	Conferencia Ministerial Africana sobre Medio Ambiente
APEC	Cooperación Económica Pacífico-Asiática*
ACNUR	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
AOD	Asistencia oficial para el desarrollo
ASEAN	Asociación de Naciones Unidas del Asia Sudoriental
CAPI	Comisión de Administración Pública Internacional
CARICOM	Comunidad del Caribe
CDB	Convención de Diversidad Biológica
CDS	Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
CEDEAO	Comunidad Económica de los Estados de Africa Occidental
CEEAC	Comunidad Económica de los Estados de Africa Central
CEI	Comunidad de Estados Independientes
CEPA	Comisión Económica para Africa
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CEPE	Comisión Económica para Europa
CESPAO	Comisión Económica y Social para Asia Occidental
CESPAP	Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
CGIAR	Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales
CILSS	Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel
CITES	Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
CIUC	Consejo Internacional de Uniones Científicas
CMA	Consejo Mundial de la Alimentación
CMDs	Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
CNUAH	Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
CNULD	Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
CNUMAD	Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
COI	Comisión Oceanográfica Intergubernamental
COMESA	Mercado Común de Africa Sur-Occidental*
DAES	Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
DELP	Documentos de estrategia de lucha contra la pobreza
EIA	Evaluación de impacto ambiental
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FIDA	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FIDA	Fundación para la Asistencia Internacional para el Desarrollo*
FISQ	Foro Intergubernamental de Seguridad Química
FMAM	Fondo para el Medio Ambiente Mundial
FMI	Fondo Monetario Internacional
FNUAP	Fondo de Población de las Naciones Unidas
FNUB	Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques
GATT	Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
GEACCM	Grupo de Expertos sobre los Aspectos Científicos de la Contaminación del Mar
GEI	Gases efecto invernadero
GLOBE	Organización Mundial de Legisladores en pro de la Protección del Medio Ambiente
GRID	Base de Datos sobre Recursos Mundiales
IGAD	Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo
ICSC	Comisión Internacional de Servicios
ICTSD	Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible
IEEA	Contabilidad Económica y Ambiental Integrada*
IPCC	Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

IPCS	Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas
IPM	Manejo Integrado de Plagas*
ISDR	Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres*
ISO	Organización Internacional de Normalización
LA21	Programas 21 locales*
MARPOL	Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques
MEAs	Acuerdos ambientales multilaterales*
NEAPs	Planes nacionales de acción ambiental*
NEPAD	Nueva Alianza para el Desarrollo de Africa
NSDS	Estrategias nacionales de desarrollo sostenible*
OCDE	Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
OEA	Organización de los Estados Americanos
OIEA	Organismo Internacional de Energía Atómica
OIMT	Organización Internacional de las Maderas Tropicales
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMI	Organización Marítima Internacional
OMM	Organización Meteorológica Mundial
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONG	Organizaciones no gubernamentales
ONU	Organización de las Naciones Unidas
ONUDI	Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
ONUSIDA	Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el Virus de la Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA)
OUA	Organización de la Unidad Africana
PEID	Pequeños Estados insulares en desarrollo
PMA	Países menos adelantados
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
RIQPT	Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos
SACEP	Programa de Cooperación Ambiental Sur-Asiático
SADC	Comunidad del Africa Meridional para el Desarrollo
SARD	Desarrollo agrícola y rural sostenible*
SIG	Sistema de Información Geográfica
SIMUVIMA	Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (PNUMA)
SMO	Sistema Mundial de Observación (OMM/VMM)
SPREP	Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente
TIC	Tecnología de la información y las comunicaciones
UE	Unión Europea
UICN	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos
UMA	Unión del Magreb Árabe
UNCLOS	Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar
UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
UNDRO	Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNIFEM	Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
UNFCCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
UNU	Universidad de las Naciones Unidas
VAG	Vigilancia de la Atmósfera Global (OMM)
VIH/SIDA	Virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
VMM	Vigilancia Meteorológica Mundial

WWF
ZEE

Fondo Mundial para la Naturaleza
Zona Económica Exclusiva

* * *

* La mayoría de los términos y de las siglas han sido oficialmente traducidos por la ONU del inglés al español. Sin embargo, se dan casos en los cuales no existe una traducción oficial del término y, por tanto, la traducción es libre. Estos casos aparecen señalados con un asterisco. En otros casos, aunque el término se encuentre traducido al español, la sigla en inglés es la que se utiliza comúnmente.

CAPÍTULO 2: COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA ACELERAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO Y POLÍTICAS INTERNAS CONEXAS

Adopción de decisiones: Le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores la planificación, dirección, coordinación, ejecución, control e información de la política exterior que formula el Presidente de la República. Para cumplir esta misión, cuenta con la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales y con la colaboración de AGCI, como organismo dependiente del Ministerio.

Programas y proyectos: No hay información disponible.

Situación general: No hay información disponible.

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: Estos temas están incorporados en algunos de los convenios y son parte de las políticas nacionales de producción limpia y conversión tecnológica.

Información: No hay información disponible.

Investigación y tecnologías: No hay información disponible.

Financiación No hay información disponible.

Cooperación: El gobierno ha promovido en diversas formas la integración comercial en América Latina y también con otras regiones (Unión Europea, Canadá, APEC), a través de la concertación de acuerdos bilaterales y multilaterales lo más amplios posible, apoyando la liberalización del comercio agrícola y oponiéndose a los subsidios y uso arbitrario de medidas ambientales tendientes a obstaculizar el libre comercio. Durante la última década, han entrado en vigencia acuerdos de complementación económica con Bolivia (1993), Colombia (1994), Ecuador (1995), MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, 1996), México (1992 y 1998) y Venezuela (1993).

Un acuerdo de cooperación más amplio se ha establecido entre Chile y Canadá (1997), el que además de un tratado de libre comercio, incluye dos acuerdos complementarios: De cooperación laboral, cuyos objetivos generales son mejorar las condiciones de trabajo y niveles de vida en el territorio de cada parte; estimular la cooperación para promover la innovación así como niveles de productividad y calidad crecientes; alentar la publicación y el intercambio de información, el desarrollo y la coordinación de estadísticas, así como estudios conjuntos para promover la comprensión en beneficio mutuo, de las leyes e instituciones que rigen en materia laboral en el territorio de cada parte; promover la observancia y la aplicación efectiva de la legislación laboral de cada parte y fomentar la transparencia en la administración de la legislación laboral. De cooperación ambiental, cuyo objetivos son alentar la protección y el mejoramiento del medio ambiente en los territorios de las Partes para el bienestar de las generaciones presentes y futuras; promover el desarrollo sustentable a partir de la cooperación y el apoyo mutuo en políticas ambientales y económicas; incrementar la cooperación entre las Partes encaminada a conservar, proteger y mejorar aun más el medio ambiente, incluidas la flora y fauna silvestres; apoyar las metas y objetivos de la TLCCC; evitar la creación de distorsiones o de nuevas barreras al comercio; fortalecer la cooperación para elaborar y mejorar las leyes, reglamentos, procedimientos y políticas, y prácticas ambientales; mejorar la observancia y la aplicación de leyes y reglamentos ambientales; promover la transparencia y la participación de la sociedad en la elaboración de leyes, reglamentos y políticas ambientales; promover medidas ambientales efectivas y económicamente eficientes; y promover políticas y prácticas para prevenir la contaminación.

En trámite de aprobación por los países miembros se encuentra un acuerdo marco de cooperación con la Unión Europea, que establece la cooperación económica, social (cooperación financiera y técnica orientada a la lucha

contra la extrema pobreza y a favorecer a las capas sociales más desfavorecidas), administración pública y de integración regional, comunicación, información y cultura, formación y educación; protección del consumidor (perfeccionamiento de los sistemas y avanzar en las compatibilizaciones de las legislaciones); pesca marítima (respeto a las obligaciones internacionales comerciales y medio ambientales) y cooperación triangular (orientada a la promoción de procesos de desarrollo equitativos y sustentables en terceros países en ámbitos y sectores de interés común).

* * *

CAPÍTULO 2: COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA ACELERAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO Y POLÍTICAS INTERNAS CONEXAS – COMERCIO

Adopción de decisiones: No hay información disponible.

Programas y proyectos: No hay información disponible.

Situación general: Las características de la economía chilena se resumen en una economía abierta, con reducciones progresivas de sus aranceles y de fomento al comercio internacional, estimulando la competitividad y el auge y diversificación de sus exportaciones.

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: No hay información disponible.

Información: No hay información disponible.

Investigación y tecnologías: No hay información disponible.

Financiación: No hay información disponible.

Cooperación: El gobierno ha promovido en diversas formas la integración comercial en América Latina y también con otras regiones (Unión Europea, Canadá, APEC), a través de la concertación de acuerdos bilaterales y multilaterales lo más amplios posible, apoyando la liberalización del comercio agrícola y oponiéndose a los subsidios y uso arbitrario de medidas ambientales tendientes a obstaculizar el libre comercio. Durante la última década, han entrado en vigencia acuerdos de complementación económica con Bolivia (1993), Colombia (1994), Ecuador (1995), MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, 1996), México (1992 y 1998) y Venezuela (1993). Los objetivos generales de estos acuerdos son el establecimiento de un espacio económico ampliado entre los países, que permita la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos; la intensificación de las relaciones económicas entre los países signatarios (liberación de gravámenes y restricciones a importaciones); propiciar una acción coordinada en los foros internacionales y en las relaciones con los países más industrializados; la coordinación y complementariedad de las actividades económicas en las áreas industrial y de servicios; el estímulo a las inversiones para un mejor aprovechamiento de los mercados de los países signatarios y el fortalecimiento de la capacidad competitiva en los intercambios mundiales; y facilitar la creación y funcionamiento de empresas binacionales y multinacionales de carácter regional. En el caso del MERCOSUR, los objetivos comerciales se amplían a promover el desarrollo y la utilización de la infraestructura física, con especial énfasis en el establecimiento de interconexiones bioceánicas y a la complementación y cooperación energética, científica y tecnológica. También se han iniciado las negociaciones con Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua) para el establecimiento de un tratado de libre comercio con esos países.

En trámite de aprobación por los países miembros se encuentra un acuerdo marco de cooperación con la Unión Europea, que establece la cooperación económica, social (cooperación financiera y técnica orientada a la lucha contra la extrema pobreza y a favorecer a las capas sociales más desfavorecidas), administración pública y de integración regional, comunicación, información y cultura, formación y educación; protección del consumidor (perfeccionamiento de los sistemas y avanzar en las compatibilizaciones de las legislaciones); pesca marítima (respeto a las obligaciones internacionales comerciales y medio ambientales) y cooperación triangular (orientada a la promoción de procesos de desarrollo equitativos y sustentables en terceros países en ámbitos y sectores de interés común).

* * *

CAPÍTULO 3: LUCHA CONTRA LA POBREZA

Adopción de decisiones: A nivel gubernamental se crea en abril de 1994 el Comité de Ministros Social, entidad asesora del Presidente de la República, quien lo preside. Está integrado por doce Ministerios y sus respectivos Servicios, como también por las tres Fundaciones del Gabinete de la Primera Dama, la coordinación está a cargo de MIDEPLAN. Dicho Comité es una instancia de coordinación gubernamental de las políticas sociales y es el responsable de establecer las prioridades sociales y fijar metas; generar los mecanismos y las coordinaciones intragubernamentales necesarias para su implementación, darles seguimiento y evaluarlas, de modo de asegurar el mejor desempeño y resultado de las acciones y recursos públicos involucrados. Este Consejo tiene su expresión regional a través de los Comités Sociales Regionales en las trece regiones del país, presididos por los respectivos Intendentes e integrados por sus gabinetes sociales, y son las entidades responsables de la implementación de los programas de acuerdo a la realidad social y territorial y en el marco de las estrategias regionales de desarrollo.

El gobierno está impulsando un conjunto de medidas dirigidas a erradicar la pobreza rural, a través de programas especiales infraestructura social (redes camineras, agua potable, saneamiento, electrificación, telefonía, vivienda); y a través de programas de capacitación y formación para el trabajo, atención en salud, nivelación de estudios y cuidado de los hijos de mujeres jefas de hogar de escasos recursos. Dada la prioridad que el Gobierno otorga a la superación de la pobreza, en 1994 puso en marcha el Programa Nacional de Superación de la Pobreza (PNSP), cuyo objetivo fundamental es eliminar la pobreza en sus formas extremas. Con la perspectiva de lograr una mayor coordinación interinstitucional, descentralización, participación y adecuada focalización, se ha constituido una institucionalidad gubernamental y no gubernamental para llevar adelante el PNSP. Para 1999 se definieron los siguientes objetivos y compromisos: Reducción masiva de la extrema pobreza y mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de los sectores sociales y localidades más pobres del país, no sólo a través de aquellas políticas asistenciales que permitan defender y proteger a los grupos más vulnerables, sino también apoyando su mejor y mayor acceso a las oportunidades a través de la inversión social, con especial énfasis en la educación, salud e infraestructura social; Generación de empleo de calidad, de modo de asegurar que el mayor empleo que se genere signifique, asimismo, mayores ingresos para los hogares, destinando políticas especializadas de empleo y capacitación para jóvenes y mujeres, así como capacitación laboral y fomento productivo orientado a los segmentos de trabajadores y pequeños productores de más baja productividad; Integración social de aquellos sectores y grupos de la sociedad que, por razones de exclusión o marginalidad económica, de discriminación cultural, étnica, de género o de edad, tienen mayores dificultades para participar de los beneficios del crecimiento, con particular preocupación por los niños y las mujeres. Compromisos: políticas sociales eficaces, oportunas y personalizadas; mejorar el impacto distributivo del gasto social; más oportunidades para los trabajadores; apoyo y desarrollo de los pequeños productores y microempresarios; más y mejor educación; plan de salud familiar; acceso a la vivienda y a la infraestructura social; acceso a la justicia y a la seguridad; calidad de vida de adulto mayor; igualdad de oportunidades a todos los niños, jóvenes y mujeres. Para el cumplimiento de estos compromisos, el Gobierno ha establecido programas especiales de empleo juvenil, incorporación de discapacitados y de capacitación laboral para jóvenes y mujeres (ver capítulo 24, 25, y 32). El Ministerio de Agricultura ha implementado diferentes programas destinados a mejorar las condiciones de vida y el medio ambiente en las comunidades rurales pobres.

A nivel no gubernamental, el Consejo Nacional de Superación de la Pobreza se constituye por decreto presidencial en mayo de 1994. Está integrado por veinte personalidades provenientes del ámbito empresarial, de los trabajadores, poblacional, de las iglesias, de organismos no gubernamentales, organizaciones sociales y del mundo de la cultura. Constituye una instancia de reflexión y propuestas de iniciativas no gubernamentales para superar la extrema pobreza y colaborar con el PNSP, complementando los esfuerzos públicos con los de la sociedad civil e incentivando su participación. Al igual que en el ámbito gubernamental, se han constituido Consejos Regionales para la Superación de la Pobreza en las trece regiones del país. Para proveer a este consejo de la institucionalidad adecuada para la gestión y operación de distintas iniciativas, en 1995 se crea la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza (FNSP) como organismo privado sin fines de lucro.

Programas y proyectos: No hay información disponible.

Situación general: Como resultado de la situación económica nacional y de las políticas sociales aplicadas durante la presente década, Chile ha sido capaz de mantener un proceso continuo de reducción de la incidencia e intensidad de la pobreza tanto en términos relativos (del 45% de la población total del país en 1987, al 23% en 1996) como absolutos (2,2 millones de personas). No obstante este importante avance, la distribución del ingreso no ha evolucionado de la misma manera, prácticamente ha permanecido inalterada.

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: La FNSP implementó en 1995 el Programa Servicio País como una estrategia de intervención local que busca contribuir al desarrollo sustentable, a la integración social, y a la distribución más equitativa de los profesionales en el territorio nacional. Para ello convoca a profesionales jóvenes para dirigir su capacidad técnica especializada a las comunas que poseen claros indicadores de pobreza, desde una modalidad o forma de relación social que potencia las capacidades y fortalezas existentes, considerando a la comunidad como sujetos protagonistas de su desarrollo. Las áreas de trabajo prioritarias son Desarrollo Comunitario (fortalecimiento de las habilidades y potencialidades de grupos sociales para permitirles ser gestores de su propio desarrollo, proporcionando las herramientas y asesoría básica, respetando la identidad cultural y fomentando la participación ciudadana); Planificación (apoyo técnico y metodológico a los Municipios en lo que se refiere a la planificación comunal, impulso y apoyo a procesos de innovación y fortalecimiento de la gestión municipal y local); Desarrollo Productivo (incorporación de nuevos conceptos y técnicas que apoyen a la comunidad a mejorar su actividad o complementarla con otra que permita mejorar sus niveles de ingreso, en especial en los sectores de pesca artesanal, economía rural y turismo; apoyando iniciativas en el ámbito técnico productivo, comercialización y agregación de valor, capacitación y educación, y equipamiento productivo); y Asentamientos Humanos (mejoramiento de la calidad habitacional -vivienda e infraestructura comunitaria- y acceso a la justicia).

Información: No hay información disponible.

Investigación y tecnologías: No hay información disponible.

Financiación: Durante el período 1990-1997 la proporción del gasto del gobierno central en funciones sociales (salud, vivienda, previsión, educación, empleo, y otros) se mantuvo alrededor del 67%, aumentando de 12,9% a 14,1% del PIB durante el mismo período. La FNSP recibe un 0% de aportes públicos y un 40% de aportes de empresas, particulares, instituciones filantrópicas y organismos internacionales.

Cooperación: No hay información disponible.

* * *

CAPÍTULO 4: EVOLUCIÓN DE LAS MODALIDADES DE CONSUMO

Adopción de decisiones: Las políticas de fomento productivo y de eficiencia energética son ejecutadas y coordinadas por MINECON y la CNE respectivamente; la política de certificación es coordinada por CONAMA. El Gobierno ha promovido diversas medidas de políticas tendientes a los cambios en los patrones de producción y consumo. Entre ellas cabe mencionar: La Política Energética Chilena, que implementa la CNE, ha explicitado la protección del medio ambiente como uno de sus objetivos centrales. Al mismo tiempo, se está impulsando un programa de uso eficiente de energía en el sector industrial, sector público y residencial (otros antecedentes se presentan en el capítulo 9) y se están realizando proyectos para ampliar la utilización de otros recursos renovables tales como el biogas, las micro y minicentrales hidroeléctricas, la energía solar térmica, la energía solar fotovoltaica y la energía eólica, la mayoría de ellas con aplicaciones en las áreas rurales, si bien en conjunto sólo representaban en 1993 aproximadamente el 0,2% del consumo energético primario nacional. La energía eólica es uno de los recursos que la CNE está estudiando para ampliar los conocimientos prácticos y el uso de esta tecnología en los sectores rurales del país y se está tramitando un proyecto de ley de concesiones de geotermia que podría transformar la energía geotérmica en una nueva fuente energética. Están también las Políticas de Fomento Productivo, implementadas por MINECON, orientadas a incentivar la conversión tecnológica mediante la transferencia de tecnologías limpias y a acceder a certificaciones ambientales de calidad tipo ISO 14.000, para mejorar la calidad de vida de la población y mejorar el acceso a los mercados externos. La Política de Certificación de la Calidad Ambiental de los Productos Chilenos, en elaboración en la Unidad de Economía Ambiental de CONAMA, que tiene como objetivos fomentar la creación de conciencia ambiental entre los consumidores nacionales acerca de la calidad ambiental de los productos que consumen; promover y facilitar en el sector productivo nacional, orientado tanto al mercado interno como externo, y particularmente en la pequeña y mediana empresa, la utilización de instrumentos de provisión de información acerca del desempeño ambiental de sus productos; desarrollar activamente iniciativas de certificación ambiental sectoriales para el sector exportador, así como también promover la implementación de sistemas de gestión ambiental certificables en las empresas. En general la política busca promover el uso de instrumentos de certificación de calidad ambiental para aportar a la transparencia en la comercialización de productos en el mercado nacional, como también para facilitar la inserción y permanencia de los productos nacionales en los mercados internacionales.

Programas y proyectos: El Gobierno, a través de distintas instituciones (CORFO, CONICYT, Subsecretaría de Pesca, CIMM, CONAMA) ha implementado diversos programas de desarrollo productivo, que incluyen subsidios para el desarrollo tecnológico y productivo (FONTEC), científico y tecnológico (FONDEF), innovación (FDI y FIA), mejor aprovechamiento y conservación de recursos naturales (FIM y FIP) y conversión tecnológica (TECFIN).

Situación general: No hay información disponible.

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: No hay información disponible.

Información: Desde el punto de vista de información a la población en general, el Servicio Nacional del Consumidor, creado con la finalidad de orientar y asesorar al público en sus decisiones de consumo en el contexto de una economía abierta, ha creado un departamento de educación al consumidor y una línea publicaciones destinada a facilitar el acceso y consulta del público a los estudios e informes sobre variados temas vinculados con la características de los productos, y normas de protección de los consumidores y ofrece, además, un espacio voluntario de solución de conflictos en materia de consumo.

Investigación y tecnologías: No hay información disponible.

Financiación: No hay información disponible.

Cooperación: No hay información disponible.

CAPÍTULO 4: EVOLUCIÓN DE LAS MODALIDADES DE CONSUMO – ENERGÍA

Adopción de decisiones: No hay información disponible.

Programas y proyectos: No hay información disponible.

Situación general: No hay información disponible.

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: No hay información disponible.

Information: No hay información disponible.

Investigación y tecnologías: No hay información disponible.

Financiación: No hay información disponible.

Cooperación: No hay información disponible.

* * *

CAPÍTULO 4: EVOLUCIÓN DE LAS MODALIDADES DE CONSUMO – TRANSPORTE

Adopción de decisiones: No hay información disponible.

Programas y proyectos: No hay información disponible.

Situación general: No hay información disponible.

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: No hay información disponible.

Información: No hay información disponible.

Investigación y tecnologías: No hay información disponible.

Financiación: No hay información disponible.

Cooperación: No hay información disponible.

* * *

CAPÍTULO 5: DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y SOSTENIBILIDAD

Adopción de decisiones: Actualmente es MIDEPLAN, a través de su Unidad de Estudios Prospectivos, quien estudia y analiza las tendencias demográficas en el mediano y largo plazo, y su impactos en las distintas áreas de políticas públicas. El procesamiento y divulgación de las principales fuentes de información demográfica y socioeconómica la realizan el INE y MIDEPLAN.

En función de las tendencias demográficas MIDEPLAN creó en 1990 el Programa del Adulto Mayor, destinado a elaborar una política nacional para este grupo, se concretaron iniciativas legales para mejorar su situación previsional y en 1995 se crea la Comisión Nacional para el Adulto Mayor, a partir de cuyo informe el Gobierno formuló una Política Nacional para este grupo, que se concreta en programas específicos de salud, educación, vivienda, previsión social y recreación. De igual manera se estableció el Consejo Nacional de la Discapacidad, el cual ha elaborado una política nacional en los ámbitos de la prevención, rehabilitación, inserción laboral e integración sociocultural. Otros programas para grupos específicos (mujer, niños y jóvenes, pueblos indígenas y mujeres jefas de hogar).

Programas y proyectos: No hay información disponible.

Situación general: El crecimiento demográfico de Chile se ha mantenido durante las últimas décadas en un nivel que se considera adecuado, no existiendo en la actualidad políticas explícitas destinadas a reducir o incrementar su ritmo de cambio. Tal como se indicara en el Documento de Posición de Chile, presentado a la Conferencia Mundial de Población de 1994, "el Gobierno no se plantea alcanzar un determinado valor meta de la fecundidad ni tampoco establecer vínculos cuantitativos entre dicha variable y el proceso de crecimiento económico. Las medidas que se adoptarán en el ámbito de la fecundidad están más bien fundamentadas en argumentos de tipo ético: equidad, mejoramiento de las condiciones de vida de la población y del bienestar familiar (que son inherentes al desarrollo social que se persigue). En tal sentido, el Gobierno se propone actuar de manera activa facilitando a la población los recursos y la información necesarios para que se cumplan estos objetivos".

La evolución que ha tenido la fecundidad en Chile y su efecto sobre la composición de la población permite pronosticar un descenso de la población joven, el aumento de la población en edad avanzada y la tendencia a la estabilización de los grupos entre 15 y 45 años. El Gobierno está analizando la evolución de otros componentes que resultan del comportamiento del ritmo de crecimiento de la población, como son la estructura, composición y distribución espacial de la población, especialmente el proceso de urbanización, que plantean importantes desafíos futuros: Por un lado, la aún incipiente tendencia al envejecimiento de la población, como consecuencia de la disminución de la natalidad y mortalidad, implica la entrega de atención social a una población creciente; por otra parte, la alta concentración de la población, principalmente en tres ciudades del país, impone altos requerimientos en el campo social, en la infraestructura urbana y en el medio ambiente; y el rezago de grupos poblacionales en situación de pobreza y falta de acceso a oportunidades de desarrollo, hace necesaria una política social activa y consecuente.

Si bien en Chile no hay políticas de población explícitas, existe un conjunto de programas vinculados a temas de salud materno-infantil, planificación familiar, equidad de género y habilitación de la mujer, salud, derechos reproductivos, equidad social y bienestar de la familia, además de programas especiales dirigidos a sectores específicos de la población.

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: No hay información disponible.

Información: Siendo el crecimiento con equidad el principal objetivo de la política de desarrollo del país MIDEPLAN mantiene un banco de datos sobre población y necesidades básicas en Chile (desagregado regionalmente según contextos urbanos y rurales) y ha realizado estudios sobre las tendencias demográficas hasta el año 2025 analizando su impacto en las áreas de salud, educación, previsión social, fuerza de trabajo y empleo, pobreza y medio ambiente, con el propósito de entregar antecedentes objetivos que sirvan de base para la toma de decisiones públicas y privadas. Además de los estudios temáticos, el país cuenta con diversas fuentes de información periódicas que permiten un adecuado conocimiento sobre la situación, características y tendencias del

comportamiento demográfico (censos, registros de estadísticas vitales, encuestas de hogares -presupuesto familiar y empleo- y encuesta de caracterización socioeconómica).

Investigación y tecnologías: No hay información disponible.

Financiación: No hay información disponible.

Cooperación: No hay información disponible.

* * *

CAPÍTULO 6: PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD HUMANA

Adopción de decisiones: La institución responsable es el Ministerio de Salud, que tiene a su cargo 29 Servicios de Salud a lo largo de todo el país. En 1996 se crea la División de Salud Ambiental, instancia responsable de la coordinación intra e intersectorial para abordar los problemas ambientales que afectan la salud de la población. El Instituto de Salud Pública, a través de su Departamento de salud Ocupacional y Contaminación Ambiental, actúa como centro nacional de referencia en materia de asesorías, generación de normas, formación de recursos humanos, investigación y difusión del conocimiento en materias de salud ocupacional y ambiental, normalizando, supervisando, capacitando y asesorando a los Laboratorios del Ambiente de los Servicios de Salud del país, para apoyar la vigilancia epidemiológica y los programas ministeriales.

Para focalizar adecuadamente la atención de salud primaria a las necesidades de la población, especialmente en las comunidades más pobres, se realizan Diagnósticos y Planes de Acción Participativos, involucrando a profesionales del sector público y a la comunidad.

Programas y proyectos: En 1990 MINSAL da inicio a un programa específico que contiene diversas medidas que apuntan a mejorar el nivel primario y fortalecer las estrategias de atención primaria en salud: gratuidad de la atención a todos los usuarios del sistema, ampliación de la infraestructura, aumento de recursos para medicamentos a los usuarios del sistema público de salud más pobres, principalmente en la atención primaria (la cobertura de gratuidad en este aspecto aumentó de 38,6% a 53,6% entre 1990 y 1996), personal, capacitación y mejoramiento de la gestión. Bajo este programa se crearon -entre otros- los Servicios de Atención Primaria de Urgencia, lo que ha permitido aumentar la cobertura y la capacidad resolutoria del primer nivel de atención: el Programa de Salud Rural, que ha permitido desarrollar durante el período 1990-1996 actividades de mejoramiento de la salud y bienestar de 195 comunidades rurales más pobres del país (si bien la cobertura del servicio de salud pública en las áreas rurales se ha mantenido cerca del 82% entre 1990 y 1996); y el establecimiento de laboratorios básicos en los consultorios, tanto en el área urbana como rural, lo que ha facilitado una mayor rapidez en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. En términos generales, la cobertura del sistema público de salud se ha reducido de 67,6% en 1990 a 59,6% en 1996, producto de la incorporación de los sectores de mayores ingresos al sistema privado (32,4% a 40,4%), pero en los sectores de menores ingresos la cobertura de la salud pública sigue siendo mayoritaria (85% a 84,3% entre 1990 y 1996).

Actualmente el Programa Nacional de Vacunación, abarca al 96,7% de la población. En Chile ya se ha erradicado el paludismo (1939) y la poliomielitis (1975); la fiebre amarilla y el dengue han sido erradicados en 1961, sin embargo, dada la presencia endémica del vector de estas enfermedades (*Aedes aegypti*) en los tres países vecinos, se mantiene un programa de vigilancia en las regiones fronterizas que se ampliará a la Región Metropolitana y al aeropuerto internacional. Para cumplir con el objetivo de impulsar la prevención y protección de la salud en grupos poblacionales específicos, se ha implementado acciones de reforzamiento del Programa de Salud Integral de la Mujer (que incluye nuevas técnicas de control prenatal, políticas específicas para la adolescente embarazada, detección precoz del cáncer cérvico-uterino y de la mama); entre las políticas de extensión de la gratuidad a los usuarios del sistema público del primer nivel de atención, se incluye -entre otros- el control del niño sano y la reformulación del Programa Nacional de Alimentación Complementaria (el PNAC, que entrega alimentos en forma gratuita a niños y mujeres embarazadas, aumentó su cobertura entre los menores de 6 años de 67,7% a 70,6%, beneficiando especialmente a los grupos más pobres y a los menores de 2 años) y la consulta de morbilidad general. Desde 1995 existe un programa específico para el adulto mayor.

Solucionar el problema de la salubridad urbana y reducir los riesgos para la salud derivados de la contaminación y los peligros ambientales.

El tema ambiental ha sido priorizado por MINSAL en su Plan Nacional de Promoción de Salud, con una fuerte componente de educación ambiental. Los programas se centran en las áreas de prevención y control de la contaminación del aire, de los alimentos, los plaguicidas y la salud en el empleo. A lo largo del país, los 23 Departamentos de Salud del Ambiente de MINSAL están implementando un nuevo reglamento de los alimentos, cuyo control va desde el origen (elaboración) al punto final (venta), privilegiando el muestreo microbiológico.

En 1992 se inició el programa quinquenal para el fomento de la salud en el empleo, orientado a la prevención de los accidentes industriales, las enfermedades ocupacionales y la epidemiología. Los principales avances en este

programa son, entre otros, el reforzamiento de los equipos locales de salud; la capacitación en este tema de trabajadores, empleadores y funcionarios públicos de salud; el desarrollo de sistemas de vigilancia de salud del trabajador, localizado en riesgos específicos; la revisión y el desarrollo de un sistema de información nacional y local de salud ocupacional, el reforzamiento del trabajo intersectorial y el fortalecimiento de la capacidad técnica para la fiscalización centrado en los accidentes. A partir de 1998 se amplió la cobertura del sistema de vigilancia de la calidad del aire.

Durante 1999 se realizaron investigaciones sobre contaminación intradomiciliaria y catastro de fuentes fugitivas con equipos de IRA de los consultorios de la Región Metropolitana, región donde este problema es más grave. En 1993, se constituye la Comisión de Plaguicidas Interservicios y Ministerios de Salud, la que ha desarrollado e implementado la Red de Vigilancia de Efectos Agudos de Plaguicidas que cubre todas las áreas del país con mayor población en riesgo. Actualmente se trabaja en ampliar la cobertura de la red, su calidad y oportunidad de información, la capacidad de intervenir en el lugar de trabajo, y en aumentar la difusión y educación en este tema.

Situación general: La malaria también ha sido erradicada en Chile, pero la existencia de focos del vector (*Anopheles pseudopunctipennis*) y su presencia endémica en dos países fronterizos mantienen programas de vigilancia para evitar su expansión y reintroducción en el país. En el caso de la enfermedad de Chagas, actualmente se ha interrumpido la transmisión vectorial (*Triatoma infestans*) y se estima que para el año 2000 se habrá eliminado la presencia del vector en el país. El programa de eliminación contempla la educación sanitaria, fumigación de viviendas, vigilancia activa por parte de los Servicios de Salud y vigilancia pasiva del profesorado rural y auxiliares de postas rurales, en coordinación permanente con las municipalidades de las regiones afectadas (zona norte del país).

La mortalidad por enfermedades respiratorias en menores de cinco años se ha reducido en un 55% entre 1986 y 1995 (de 6,6 a 3,0 por cada 10.000), desde 1990 existe un programa de control de las IRA infantiles que se aplica a nivel de atención primaria y que ha tenido un impacto evidente en la reducción de la mortalidad infantil en este periodo. El programa de control de la tuberculosis (TBC) que se aplica desde inicios de la década del 1970 ha logrado importantes reducciones en la incidencia de la TBC (todas las formas) desde 81,3 a 27,5 por cien mil habitantes entre 1975 y 1996. En forma exitosa se mantiene la aplicación de programas de vigilancia ambiental y personal para el cólera; programas de vacunación para el sarampión, y programas de prevención para controlar la fiebre tifoidea, hepatitis y otras enfermedades intestinales y enfermedades de transmisión sexual, esencialmente el SIDA.

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: El Gobierno ha hecho esfuerzos especiales para mejorar la infraestructura y dotación de los recursos humanos. Durante 1990-1997, el presupuesto real del sector público en salud ha aumentado en más de un 100%, especialmente por las inversiones, insumos y financiamiento de la Atención Primaria bajo administración municipal (ítem que creció en un 800%) y mayor dotación de recursos humanos e incrementos salariales (partida que creció en un 70%).

Información: No hay información disponible.

Investigación y tecnologías: No hay información disponible.

Financiación: La proporción del gasto en salud del gobierno central ha aumentado de 10.3% en 1990 a 11.9% en 1997. En relación al PIB ha significado un aumento de 2,0% a 2,5%.

Cooperación: A través de un proyecto bilateral con Perú se está abordando el problema de la tuberculosis resistente al tratamiento.

* * *

CAPÍTULO 7: FOMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS ASENTAMIENTOS (RECURSOS) HUMANOS

Adopción de decisiones: El Ministerio de Vivienda y Urbanismo es la entidad responsable de la formulación y supervisión de las políticas nacionales sobre vivienda, equipamiento comunitario y urbanismo, así como las normas técnicas para su cumplimiento, y de la administración de los recursos asignados y la coordinación y evaluación en el ámbito regional de estas materias. En 1998 se aprobó la Ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria (D.O 16/12/98) preparada por el MINVU, la cual incluye a los Condominios de Viviendas Sociales, posibilitando que los gobiernos regionales, las municipalidades y los SERVIU puedan destinar recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de dichos condominios. En Chile se aumentó considerablemente la producción habitacional, pública y privada durante el período 1990/97 (promedio de 116.515 unidades anuales, con una superficie promedio de 62 mts²) con relación al período 1985/89 en que la producción sólo alcanzó a 66.991 unidades anuales, con una superficie promedio de 55 mts². Del total de unidades realizadas durante el período 90/97, aproximadamente el 80% corresponden a viviendas con aporte estatal (5 a 95% de subsidio en proporción inversa al nivel socioeconómico de las familias). Lo anterior se ha logrado a través de una acción compartida entre el Gobierno, el sector privado y la organización y ahorro de la gente, mediante la implementación y modificación de diversos programas habitacionales (Programa de Vivienda Progresiva, Vivienda Básica, Programa Especial de Trabajadores, Subsidio Rural, Subsidio Unificado. Algunos de estos programas incorporan medidas especiales orientadas a grupos vulnerables: adulto mayor, jefas de hogar, discapacitados y población indígena. Por otra parte se aprobó la Ley de Leasing Habitacional y el Sistema de Movilidad Habitacional orientados a facilitar el acceso a la vivienda a segmentos de distintos sectores económicos y contribuir a la activación permanente del sector construcción. El MINVU también ha impulsado la prestación de apoyo técnico especializado a las familias de escasos recursos que han obtenido un subsidio habitacional.

Programas y proyectos: En 1996 el MINVU inició el Programa de Mejoramiento Comunitario, orientado a la construcción de equipamiento en poblaciones de vivienda social entregadas con anterioridad al 31 de Diciembre de 1994, incorporando en su financiamiento a los respectivos municipios y a la propia comunidad. Este Programa contempla equipamiento que promuevan el desarrollo social y recreacional de la comunidad, tales como plazas, juegos infantiles, multicanchas, salas de uso múltiple, centros abiertos y talleres laborales. A la fecha se han construido alrededor de 400 equipamientos equivalentes a una inversión aproximada de 10 mil millones de pesos. El MINVU implementó también en 1995 el Programa de Pavimentos Participativos, orientado a la construcción de pavimentos nuevos en calles y pasajes con el objetivo de reducir el déficit de pavimentación para mejorar la calidad de vida de la población y el cual cuenta con aportes del municipio y de las familias postulantes. A la fecha se han pavimentado 1.850 kms, con una inversión de 230 millones de US\$. El MINVU en conjunto con el INE están implementando un nuevo sistema de recopilación de la información procedente de la Encuesta de Edificación Aprobada, aumentando y mejorando el actual formulario incorporando información solicitada por el Banco Central. En 1998 se aprobó la Ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria (D.O 16/12/98) preparada por el MINVU, la cual incluye a los Condominios de Viviendas Sociales, posibilitando que los gobiernos regionales, las municipalidades y los SERVIU puedan destinar recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de dichos condominios. El MINVU contempla dentro de sus funciones principales la preocupación por el uso de la tierra como condición esencial para el desarrollo del país. En ese marco se han reformulado los contenidos de diversos instrumentos de Planificación: el Plan Regional de Desarrollo Urbano y Planes Reguladores Intercomunales, en los cuales se han consultado especialmente una política sobre aprovechamiento de los recursos naturales no renovables y la protección del medio ambiente natural, como asimismo medidas destinadas a mejorar la capacidad de gestión regional e intercomunal. Asimismo el MINVU ha realizado diversos estudios, uno de los cuales es el que se refiere a la definición de la "capacidad vial de los planes reguladores" a fin de ajustar los requerimientos de vialidad según los diversos usos de suelo propuestos.

Situación general: La política habitacional del Gobierno de Chile se propuso en una primera instancia congelar el déficit de vivienda, privilegiando a los sectores más pobres en la asignación de los recursos públicos promoviendo al mismo tiempo la actividad de la construcción incorporando al sector privado en la gradual superación del problema. El MINVU participa en la Comisión Interministerial de Planificación de la Infraestructura de Transporte

Urbano y en la Comité Interministerial de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, orientadas a coordinar acciones y decisiones en materias urbanas o de transporte. El MINVU realizó un estudio tendiente a definir las exigencias de confort térmico en la construcción de viviendas con el objetivo de lograr significativos ahorros de energía. Junto con la preocupación por reducir el déficit habitacional cuantitativo, se han realizado esfuerzos por reducir también el déficit de materialidad y saneamiento para mejorar el acceso de la población a los servicios sanitarios básicos. La cobertura de agua potable en las zonas urbanas es cercana al cien por cien, y la cobertura del sistema de recolección de aguas servidas supera el 90 por ciento. El saneamiento de las aguas rurales es todavía un desafío. Mientras el 1% por ciento de los hogares urbanos presenta déficit de saneamiento, en esta situación se encuentra el 39% por ciento de los hogares rurales (1996). Con la finalidad de facilitar el acceso de la población urbana y rural de bajos ingresos a estos servicios básicos, el Gobierno, a través de los municipios, otorga un subsidio al consumo de agua potable y/o servicio de aguas servidas. Aun cuando la política habitacional implementada por el Gobierno ha logrado reducir la proporción de hogares con algún tipo de déficit (sanitario, material, habitacional, allegamiento) del 53% al 42%, el déficit de viviendas persiste para una proporción importante de los hogares del país. En diciembre de 1996 comenzó a regir la Ley 19.472, conocida como la Ley sobre la Calidad de la Construcción, la cual establece como uno de sus principios básicos el que cada agente que interviene en la construcción debe hacerse responsable de sus acciones. Asimismo otorga atribuciones a los Directores de Obras Municipales para la fiscalización de las construcciones y se ha establecido un sistema de protección a los compradores ante fallas en la calidad de sus viviendas, reforzando los Servicios de Información sobre Calidad de la Vivienda con que cuentan las Oficinas de Información del MINVU. El Gobierno en conjunto con el sector privado y académico impulsó la creación del Instituto de la Construcción, organismo que juega un importante papel en la promoción de la calidad y modernización del sector de la construcción a través de la investigación y coordinación de los actores involucrados.

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: No hay información disponible.

Información: No hay información disponible.

Investigación y tecnologías: No hay información disponible.

Financiación: El gasto del gobierno central se ha mantenido por sobre el 5% del total durante la presente década, alcanzando una proporción del 5,8 por ciento durante los años 1992-1996, siendo el sector social más desmejorado en materia presupuestaria, en comparación con los sectores salud y educación.

Cooperación: No hay información disponible.

* * *

CAPÍTULO 8: INTEGRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO EN LA ADOPCIÓN DE DECISIONES

Adopción de decisiones: En este tema la institución responsable es CONAMA servicio público funcionalmente descentralizado, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Sus órganos son el Consejo Directivo, integrado por los siguientes Ministros: la Secretaría General de la Presidencia - que lo preside -; Economía, Fomento y Reconstrucción; Obras Públicas, Agricultura, Bienes Nacionales, Salud, Minería, Vivienda y Urbanismo, Transporte y Telecomunicaciones, Planificación y Cooperación, Relaciones Exteriores, Educación y Defensa). Le corresponde a este Consejo velar por la coordinación ambiental entre los ministerios y servicios públicos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y por el cumplimiento de los acuerdos y políticas establecidos por la Comisión, proponer al presidente de la República proyectos de ley y actos administrativos y aprobar el programa de actividades y proyectos de la Comisión; los acuerdos adoptados son ejecutados por los organismos del Estado competentes. La Dirección Ejecutiva, que administra el servicio, cumple y hace cumplir los acuerdos e instrucciones del Consejo Directivo y propone el programa anual de actividades; y el Consejo Consultivo, que es un órgano de consulta y apoyo al Consejo Directivo y a la Dirección Ejecutiva, está integrado por dos científicos, dos representantes de organismos no gubernamentales, dos representantes de centros académicos, dos representantes del empresariado, dos representantes de los trabajadores y un representante del Presidente de la república). El trabajo de la CONAMA se apoya en las unidades ambientales de los distintos ministerios y servicios públicos. La CONAMA tiene su expresión regional a través de las respectivas Comisiones Regionales de Medio Ambiente y su Consejos Consultivos Regionales en las trece regiones del país. La CONAMA actúa además como Secretaría Ejecutiva del Consejo de Desarrollo Sustentable, creado en 1998. Al mismo tiempo, y en conjunto con otros ministerios, CONAMA está desarrollando estudios prospectivos de la sustentabilidad, con el objetivo de identificar en forma anticipada los posibles efectos de las decisiones económicas sobre el medio natural. Esos estudios contemplan tres componentes: la formalización de la recopilación sistemática de información ambiental, el desarrollo y difusión de indicadores de la calidad ambiental y el desarrollo de un modelo económico de equilibrio general que considere la dimensión ambiental.

En 1994 se aprueba la Ley No 19.300 de Bases sobre el Medio Ambiente, iniciándose de esta manera un proceso ordenador de la normativa ambiental y la puesta en marcha de la institucionalidad ambiental. A partir de la promulgación de esta ley, se establecen los mecanismos para administrar y regular el uso de los componentes del medio ambiente. Los instrumentos creados incluyen: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; la dictación y revisión de Normas de Calidad Ambiental, Preservación de la Naturaleza y Conservación del Patrimonio Ambiental; Normas de Emisión; Planes de Manejo, Prevención o Descontaminación y establece, además, la Responsabilidad por Daño Ambiental.

En 1998 se aprueba la Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable, cuyos objetivos son: recuperar y mejorar la calidad ambiental, prevenir el deterioro ambiental, fomentar la protección del patrimonio ambiental y el uso sustentable de los recursos naturales, introducir consideraciones ambientales en el sector productivo, involucrar a la ciudadanía en la gestión ambiental, fortalecer la institucionalidad ambiental a nivel nacional y regional, y perfeccionar la legislación ambiental y desarrollar nuevos instrumentos de gestión. En el mismo documento de política se establecen las líneas de acción para cada objetivo y la Agenda Ambiental del Gobierno, la identificación de las tareas prioritarias para el perfeccionamiento del sistema y la definición de los grandes temas que el país debe abordar, por ejemplo la EIA de los planes reguladores, criterios ambientales en las políticas sectoriales la relación de las COREMAS con la Estrategias de Desarrollo Regional.

A partir de 1993 se inició el Proyecto CONAMA/BIRF sobre Desarrollo de Instituciones Ambientales, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad ambiental pública para mejorar la planificación, programación, coordinación y evaluación de sus planes, programas y proyectos. Tiene dos grandes componentes: Apoyo al Plan Estratégico de CONAMA (1993-1997) que incluye aspectos de legislación ambiental, EIA, capacitación en gestión ambiental para el sector público, desarrollo de un sistema nacional de información ambiental, educación ambiental no formal, e introducción de conceptos económicos en el análisis y en la toma de decisiones ambientales del sector público. El segundo componente es el fortalecimiento institucional ambiental en sectores prioritarios (forestal,

minero, industrial, descontaminación ambiental), y es ejecutado por las propias instituciones sectoriales, que forman parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, bajo la coordinación de CONAMA.

Todas las propuestas de ley y reglamentos son discutidas con los diversos actores de la comunidad nacional, los cuales están representados en los Consejos Consultivos Nacional y Regional de CONAMA, además de ser sometidas a procesos de discusión pública. De igual manera, la Ley 19.300 contempla mecanismos especiales de participación ciudadana para los anteproyectos de normas ambientales y de planes de descontaminación y para todos los proyectos que son sometidos al SEIA.

Programas y proyectos: El Banco Central de Chile -institución responsable de la elaboración de las Cuentas Nacionales del país– y CONAMA iniciaron en 1994 un proyecto de contabilidad ambiental que pretende crear un Sistema de Cuentas Satélites Ambientales para Chile. Los componentes de este proyecto son: balances de activos físicos, costos de mitigación, gastos de protección ambiental y valorización de los balances de activos físicos. Se ha trabajado con tres sectores productivos (forestal, pesca y minería). CONAMA, con el apoyo de expertos de España, Francia e Italia realizó en 1998 un estudio para definir una metodología de elaboración de Cuentas del Recurso Agua en Chile, como parte de las Cuentas Ambientales. El modelo resultante contempla la realización de tres tipos de cuentas: cuentas en cantidad, cuentas en calidad y cuentas monetarias. El modelo ya ha sido aplicado a una cuenca del país como parte del apoyo a la gestión y manejo sustentable de los recursos naturales de Chile.

En 1997 se inició el Programa de Fortalecimiento y Cumplimiento de las Normas del Medio Ambiente (proyecto CONAMA/BIRF), cuyo objetivo es fortalecer a los sectores público y privado del país en la elaboración, promoción y cumplimiento de las normas ambientales; a través de dos componentes: desarrollo de recursos humanos (entrenamiento de funcionarios gubernamentales, información y educación ambiental y asistencia técnica) y asistencia técnica a CONAMA para el fortalecimiento de su capacidad gerencial y de coordinación del sistema nacional de gestión ambiental. En 1996, con el aporte del Gobierno de Japón, y en conjunto con CONAMA y la Universidad de Chile, se da inicio a las actividades del CENMA, institución que tiene como objetivo principal entregar apoyo técnico al Estado para la formulación y aplicación de políticas de protección ambiental en el país.

Situación general: La introducción de instrumentos económicos en la gestión ambiental chilena es materia de reciente análisis, no obstante se han realizado diversos estudios orientados a evaluar las potencialidades de algunos de estos instrumentos para recuperar y mejorar calidad ambiental, entre ellos: sistemas de tarificación diferenciada para el manejo de residuos sólidos domiciliarios en base a la cantidad generada; propuesta de instrumentos económicos para el control de los efluentes industriales y mineros (RILES) en aguas superficiales y subterráneas aplicación y de desincentivos económicos en la fiscalización y sanción para el control de la contaminación urbana. Actualmente se trabaja en la elaboración del proyecto de ley de Permisos de Emisión Transables y se analizan las situaciones en donde estos podrían ser aplicables en la gestión ambiental nacional.

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: No hay información disponible.

Información: No hay información disponible.

Investigación y tecnologías: No hay información disponible.

Financiación: El proyecto de desarrollo institucional tiene un presupuesto total de 32,7 millones de dólares, de los cuales 21,2 fueron aportados por el Estado chileno. El proyecto CONAMA/FOMIN tiene un presupuesto total de 1,9 millones de dólares aportados por FOMIN y US\$ 230 mil aportados por el Gobierno. En 1998 el presupuesto ambiental del sector público fue de 315 millones de dólares, equivalente al 2% del gasto público total.

Cooperación: No hay información disponible.

* * *

CAPÍTULO 9: PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA

Adopción de decisiones: CONAMA coordina a nivel nacional las acciones relacionadas con la problemática del cambio climático, y para ello cuenta con la participación activa de distintas instituciones gubernamentales (entre ellos el Ministerio de RREE, que representa a Chile en los procesos de negociación internacional y la CNE, responsable de establecer la política nacional de energía), organizaciones privadas, universidades y organismos no gubernamentales. En 1996 se creó el Comité Nacional Asesor sobre Cambio Global, cuya función es asesorar al Ministerio de RREE en relación con la posición nacional respecto a la Convención de Cambio Climático y a la CONAMA en la implementación nacional de planes y programas; asesorar a las instituciones dedicadas a la investigación sobre el Cambio Global y servir de mecanismo de coordinación entre todas las entidades vinculadas al tema. Está integrado por: CONAMA, que lo preside, Ministerio de RREE, MINAGRI, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, MINECON, SHOA, CNE, DIRECTEMAR, DMC, CONICYT, Academia Chilena de Ciencias, ENAP, Confederación de la Producción y del Comercio y CODELCO. Es responsabilidad de este Comité la elaboración de los lineamientos estratégicos en materia de cambio climático en Chile, a través de los cuales el Gobierno se ha comprometido a realizar diferentes acciones para enfrenar el problema en el país, entre las que se incluyen la participación más activa y temprana de Chile en la solución de este problema global, la ratificación del Protocolo de Kioto, el uso del mecanismo de desarrollo limpio y el análisis de las ventajas y/o desventajas de que Chile acceda a los otros mecanismos económicos del Protocolo (implicancias de posibles mecanismos voluntarios); la elaboración de un plan de acción nacional en cambio climático y la generación de un fondo para la investigación científica en esta materia. El control de las quemas agrícolas y la prohibición de quemas residuales son responsabilidad de CONAF y MINAGRI respectivamente.

Programas y proyectos: Desde fines de 1995, a través del proyecto PNUD/GEF/OMM/DMC Network on ozone and greenhouse gases monitoring and research southern cone countries" la DMC realiza mediciones de ozono superficial (Cerro Tololo, IV Región) y de perfil vertical de ozono (Isla de Pascua). En 1996 se iniciaron mediciones de radiación ultravioleta espectral (Valdivia). En conjunto con universidades se realizan observaciones de radiación ultravioleta y ozono total. Estas estaciones se suman a la red propia de la DMC de medición de radiación ultravioleta en nueve estaciones a lo largo de país, las que forman parte de la Red de Vigilancia de la Atmósfera Global de la OMM.

En cumplimiento con lo establecido en la Convención Marco, en 1996 CONAMA inició la ejecución de un inventario nacional preliminar (año 1993) de gases de efecto invernadero; en 1997 se inicia el proyecto GEF-CHI/G31/96 Capacitación de Chile para cumplir sus compromisos con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cuya finalidad es preparar la primera comunicación nacional a la conferencia de las Partes, a través de la realización de un inventario de gases de efecto invernadero, la evaluación de vulnerabilidad y adaptación a los impactos del cambio climático en Chile y un análisis de las opciones de mitigación (incluyendo los escenarios de línea de base de emisiones y escenarios futuros mitigados) para los sectores energía y no-energía. Se contempló, además, la preparación de un Plan de Acción Nacional.

En 1997 CONAMA encargó la ejecución de estas actividades a instituciones de investigación nacionales (PRIEN, y el Centro AGRIMED de la Universidad de Chile; el INIA, del Ministerio de Agricultura; y el Centro EULA de la Universidad de Concepción).

Desde 1992 el Gobierno está implementando el Programa Nacional de Uso Eficiente de Energía que busca impulsar proyectos de eficiencia energética de baja y mediana inversión. Las auditorías energéticas realizadas en el sector industrial y minero indican un potencial de ahorro equivalente a 20 millones de dólares anuales; en el caso de los edificios públicos se ha determinado un potencial de ahorro energético de 6 millones de dólares.

A nivel municipal, el Proyecto de Modernización del Alumbrado Público (que ha reemplazado del 45 por ciento de las luminarias) generará un ahorro anual estimado de 4 millones de dólares a los municipios, recursos que podrán ser reorientados a otras actividades. El programa ha desarrollado cursos de capacitación en las áreas térmica, eléctrica y de la construcción, para profesionales y técnicos del sector industrial y minero, tanto público como privado, se están desarrollando campañas de información para incentivar el ahorro de energía en las viviendas; y se publican boletines informativos y manuales orientados a los sectores de educación escolar, industria y comercio. La CNE en conjunto con CONAMA llevan a cabo un proyecto piloto, financiado por el GEF para reducir los gases de

efecto invernadero a través de utilización de gasificadores de biomasa para abastecimiento eléctrico de localidades rurales aisladas. Con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de recursos energéticos sin que el suministro y consumo tengan efectos nocivos para el medio ambiente, en algunas regiones del país ya se está implementando la reconversión para el consumo de gas natural, de reciente introducción en Chile. Para el caso específico de la Región Metropolitana, en 1990 se inició un Programa de Descontaminación de Santiago y en 1998 comienza el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), que incluye un programa permanente para el control de emisiones industriales, la exigencia del uso de convertidor catalítico en vehículos nuevos y la introducción de la gasolina sin plomo, la licitación de recorridos de transporte público y retiro de buses con más de 18 años de antigüedad, la creación del Departamento de Fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y la creación del Programa de Control de Quemados Agrícolas y prohibición de quemados residuales. Se han elaborado Planes de Descontaminación específicos para el sector minero, algunos de los cuales se encuentran en ejecución y otros en su etapa final de tramitación legal para su aplicación. Para el sector productivo industrial, MINECON ha explicitado la incorporación del medio ambiente en la Política de Desarrollo Productivo Sectorial como un aspecto importante del desarrollo productivo sustentable (ver capítulo 4).

En 1994 el Gobierno inició el Programa País para la Protección de la Capa de Ozono, que fue aprobado por el Comité Ejecutivo del Protocolo de Montreal, y cuyo objetivo básico es reducir el consumo de SAO. El programa finalizó la fase piloto (1994-1997) que constaba de cuatro componentes: Campaña de movilización de opinión pública para educar a la población y orientar la demanda hacia productos que no afecten la capa de ozono; Implementación del Sello Ozono, que identifica mediante una etiqueta los productos que no contengan y que en ninguna etapa de su elaboración se haya utilizado sustancias dañinas a la capa de ozono: también se puede otorgar este sello a aquellos servicios que no utilicen o hagan un buen manejo de SAO. El sello es de carácter voluntario y se encuentra vigente; Programa de incentivos para la reconversión tecnológica con la finalidad de colaborar con aquellas empresas que han iniciado un proceso de transición hacia tecnologías definitivas no destructoras de la capa de ozono; Cursos de capacitación con el objetivo de informar a las industrias sobre el estado actual de las tecnologías alternativas e influir en el proceso de toma de decisión de la empresas para la reconversión. Durante la primera fase se aprobaron y financiaron 12 proyectos de eliminación de emisiones de CFC en los sectores de fabricación de espumas plásticas y refrigeración comercial.

Situación general: No hay información disponible.

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: No hay información disponible.

Información: No hay información disponible.

Investigación y tecnologías: No hay información disponible.

Financiación: TECFIN se financia a través de una donación del Fondo Multilateral para el cumplimiento del Protocolo de Montreal. En 1997 contó con un presupuesto de aproximadamente 502,000 dólares. Entre 1995 y 1998 el financiamiento para la eliminación de las emisiones fue de 2,8 millones de dólares.

Cooperación: En 1994, Chile participó activamente en la creación de la Red Latinoamericana de Funcionarios de Ozono, instancia en que se discuten los aspectos técnicos y políticos de la implementación del Protocolo de Montreal en todos los países de la región. En 1995, Chile ingresa como miembro activo del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal representado a la región latinoamericana y participa en el subcomité de producción, representando los intereses de los países en vías de desarrollo no productores de SAO. El Protocolo de Montreal (1987) fue ratificado en 1988 y es Ley de la República desde 1990. La Enmienda de Londres (1990) fue firmada en 1992. La Enmienda de Copenhague (1992) fue firmada en 1994. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue firmada en 1992, ratificada en 1994 y es Ley de la República desde 1995.

* * *

CAPÍTULO 10: ENFOQUE INTEGRADO DE LA PLANIFICACIÓN Y LA ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS DE TIERRAS

Adopción de decisiones: No hay información disponible.

Programas y proyectos: No hay información disponible.

Situación general: No hay información disponible.

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: No hay información disponible.

Información: No hay información disponible.

Investigación y tecnologías: No hay información disponible.

Financiación: No hay información disponible.

Cooperación: No hay información disponible.

* * *

CAPÍTULO 11: LUCHA CONTRA LA DESFORESTACIÓN

Adopción de decisiones: CONAF, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, tiene la responsabilidad de garantizar el uso sostenible de los ecosistemas forestales y la administración eficiente del SNASPE. Para ello participa en la revisión de los EIA de los proyectos correspondientes; aprueba los planes de manejo forestales y de Áreas Protegidas, de acuerdo a la legislación vigente y tiene la responsabilidad de su fiscalización.

Durante el año 1998 se aprobó la modificación del decreto ley 701, que establece incentivos a la forestación. Las modificaciones propuestas concentran su énfasis en los componentes social y ambiental y apuntan a renovar los incentivos y orientarlos principalmente a la forestación de pequeñas propiedades rurales y a la recuperación de suelos. Actualmente se tramita en el Congreso Nacional del Proyecto de Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, instrumento indispensable para incentivar el manejo y uso racional especialmente del recurso forestal nativo. La Política Forestal del Gobierno está orientada a conservar y proteger los recursos forestales, fomentar el incremento de la superficie con bosques de mejor calidad y valor, velar por su aprovechamiento racional y sostenido, y promover el aumento de producción con mejor valor agregado y con mayor diversificación de mercados, basada en la sustentabilidad del recurso.

Programas y proyectos: Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población rural y al mismo tiempo promover el uso racional de los recursos forestales, CONAF ha implementado diversas acciones, entre ellas: el Programa Bosque Modelo, cuya estrategia consiste en mejorar la participación de los grupos interesados en la conservación y el manejo de los recursos naturales, considerando el uso productivo de dichos recursos, asegurando al mismo tiempo la protección del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad; el primer proyecto se inició en 1998 y contó con fondos especiales del sector público.

El Programa de Forestación de Pequeñas Propiedades, que contempla ir en ayuda de las familias rurales más necesitadas que poseen suelos altamente degradados, permitiendo así forestar alrededor de 8 mil hectáreas anuales, incorporando al desarrollo forestal a cerca de 2500 familias por temporada. El Proyecto Conservación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo, entre la VII y XI regiones del país, que entrega asistencia técnica y legal a pequeños productores agrícolas poseedores de bosque nativo, mediante la elaboración, ejecución conjunta y supervisada de planes de manejo y comercialización con el propósito de utilizar racionalmente el recurso. Finalmente están las acciones encaminadas a promover la diversificación forestal, orientada a ampliar la gama de cultivos silvícolas e incrementar el valor intrínseco de sus productos, para ampliar y favorecer tanto la capacidad exportadora del país como también el mejor uso de los suelos.

Situación general: Aproximadamente el 45% del territorio nacional corresponde a suelos de aptitud forestal, de los cuales se encuentran cubiertos por bosques y vegetación nativos, ya sea de producción o de protección, una superficie estimada en 13,5 millones de hectáreas. Las plantaciones con fines productivos cubren 2,1 millones de hectáreas y el 83% de dicha superficie está plantada con la especie pino insigne, que sustenta gran parte de la industria forestal chilena y de las exportaciones del sector (basadas principalmente en celulosa). Anualmente las exportaciones sectoriales representan para el país más del 14% del total nacional, generando una ocupación de 100 mil empleos.

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: No hay información disponible.

Información: Entre los nuevos instrumentos con los que cuenta el Estado para la gestión sustentable de los recursos forestales chilenos, se encuentra la información presentada por el último Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (elaborado conjuntamente por CONAF, CONAMA y la Universidad Austral de Chile, con fondos del Banco Mundial). Los resultados se publicaron en 1997 y constituye una significativa base de información para la política nacional forestal. De hecho, es el primer levantamiento extensivo en más de 30 años, que permite conocer la distribución y el estado de estos recursos en el país. Sobre esta base se ha podido establecer la cobertura nacional de los bosques, que alcanza al 20,8% del territorio nacional, el 17% corresponde a bosque nativo y el 2,8% a plantaciones; aproximadamente el 25% de los bosques se encuentran en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE).

Como parte del Proceso de Montreal en Chile y de la Declaración de Santiago, CONAF está elaborando los indicadores nacionales sobre la Conservación y el Manejo Sustentable de los Bosques Templados de nuestro país, de manera de evaluar la sustentabilidad de la gestión forestal a escala nacional, a la vez que desarrolla las políticas y propuestas metodológicas para la incorporación de los compromisos del Proceso en todos los niveles del sector forestal chileno.

Investigación y tecnologías: No hay información disponible.

Financiación: No hay información disponible.

Cooperación: A partir de la elaboración del Plan Nacional Forestal de Chile (que contó con asistencia financiera de los Países Bajos y la cooperación de FAO), CONAF ha entregado asistencia técnica (CTPD) a otros países de la región, como Honduras, Guatemala, Uruguay, Panamá, Cuba y otros del Caribe.

* * *

CAPÍTULO 12: ORDENACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FRÁGILES: LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA

Adopción de decisiones: CONAF es la institución contraparte ante la CCD y la encargada de coordinar las acciones del PANCD, el que en su estructura considera tres niveles de coordinación: Comité Nacional de Trabajo, Comités Regionales (en las regiones afectadas) y Comités Locales (comunas). El Comité Nacional inició sus actividades en 1997 y en 1998 comenzaron a formarse los Comités Regionales. El Comité Nacional de Trabajo es la entidad asesora del Consejo de Ministros de CONAMA para estas materias y está integrado por CONAMA, CONAF, SAG, DEPROREN, INDAP, ODEPA, Comisión Nacional de la Sequía, Ministerio de RREE, y las ONGs CODEFF y Acción por la Tierra.

Programas y proyectos: El Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PANCD) fue aprobado por el Consejo de Ministros de CONAMA y presentado por el Ministro de Agricultura en 1997. El PANCD constituye el instrumento multisectorial sensibilizado, ordenado y coordinado para facilitar la convergencia de acciones de corto, mediano y largo plazo, para prevenir, atenuar o revertir la desertificación y/o los efectos de la sequía en Chile. Tiene como objetivo último mejorar la calidad de vida de las poblaciones asociadas a los espacios en proceso de desertificación, a través de sistemas de producción sustentables. Fue elaborado en 1997 y contó con la participación de todos los sectores involucrados. Además del PANCD, existen diversos proyectos específicos destinados al control de la desertificación y manejo de cuencas, desarrollados por CONAF con financiamiento internacional: Control de Erosión y Forestación en Zonas Semiáridas (Proyecto CONAF/JICA); Economía Ambiental Aplicada al Manejo de Cuencas Hidrográficas (Proyecto DFIA); Desarrollo del Sistema Hidrológico Europeo (SHETRAN) a Problemas de Erosión e Inundación en Cuencas Hidrográficas Vulnerables en Chile. Existe una serie de medidas de subsidios y fomento que contribuyen a mitigar y/o controlar los procesos de desertificación en el país, como la ley de fomento a la forestación, orientada a la forestación y recuperación de suelos forestales focalizada en el sector campesino (que es donde se concentra los mayores problemas de desertificación); el programa del SAG sobre recuperación de suelos agrícolas y praderas naturales; ley de fomento al riego; proyecto de desarrollo a comunidades pobres (PRODECOP) de INDAP, y otros programas de CONAF mencionados en el capítulo 11.

Situación general: La lucha contra la desertificación es un proceso que ha estado internalizándose paulatinamente en el país, luego de un proceso de difusión, motivación y finalmente de adopción de decisiones. La desertificación es uno de los problemas ambientales más graves del país; se estima que aproximadamente el 63% del territorio nacional y alrededor del 75% de los suelos productivos están afectados por la erosión. En lo que se refiere a los ecosistemas desérticos, áridos, semiáridos y subhúmedos secos (en los cuales se concentra la CCD) es donde el país presenta los problemas más agudos de conservación de la biodiversidad; por ejemplo, entre las regiones de Tarapacá y Del Maule se concentra el 82% de las especies arbóreas y arbustivas con problemas de conservación (57 de un total de 69) y donde el SNASPE sólo está representado por el 5,5% de su superficie total, según el diagnóstico del PANCD, existen 1,5 millones de habitantes viviendo en condiciones de pobreza en los territorios afectados por la desertificación. Las sequías tienen un impacto político, social y económico mayor aún; el período de sequía ocurrido entre 1992-1998 (con excepción del año 1997) todavía tiene sus repercusiones, calculándose para el año 1999 pérdidas del orden de los 550 millones de dólares en las áreas de energía, industria y sector silvoagropecuario. Debido a estas consecuencias, los sectores público y privado han debido tomar una serie de medidas paliativas para superar los daños causados por esta emergencia.

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: No hay información disponible.

Información, investigación y tecnologías: No hay información disponible.

Financiación: La ley de fomento a la forestación destina 5 millones de dólares al año; 10 millones son utilizados por el programa de recuperación de suelos agrícolas y praderas naturales y PRODECOP destinó alrededor de 80 millones de dólares para el período 1996-2000.

Cooperación: La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (CCD) fue suscrita por Chile en 1995, ratificada en 1997, y es Ley de la República desde 1998. El último informe a la secretaría de la Convención se preparó en 1999.

* * *

CAPÍTULO 13: ORDENACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FRÁGILES: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE MONTAÑA

Adopción de decisiones: No hay información disponible.

Programas y proyectos: No hay información disponible.

Situación general: La información relativa a este capítulo forma parte del PANCD y está contenida en el capítulo sobre Desertificación.

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: No hay información disponible.

Información: No hay información disponible.

Investigación y tecnologías: No hay información disponible.

Financiación: No hay información disponible.

Cooperación: No hay información disponible.

* * *

CAPÍTULO 14: FOMENTO DE LA AGRICULTURA Y DEL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

Adopción de decisiones: Le corresponde al Ministerio de Agricultura la implementación de las políticas agrícolas y desarrollo rural. Para ello colaboran sus organismos dependientes ODEPA (cuyo accionar está orientado a la formulación y análisis de políticas sectoriales y a suministrar información nacional e internacional para apoyar el proceso de toma de decisiones), INDAP (que opera a través del fomento de proyectos locales orientados a pequeños campesinos, estimulando alternativas productivas y tecnológicas, facilitando sus vínculos a redes y fomentado su organización), SAG (orientado a contribuir al desarrollo agropecuario del país mediante la protección, mantención e incremento de la salud animal y vegetal, la protección y conservación de los recursos naturales renovables que inciden en el ámbito de la producción agropecuaria nacional y el control de insumos y productos agropecuarios sujetos a la regulación de las normas legales), CONAF, INIA, FIA, Unidad de Emergencias Agrícolas, y la Fundación de Comunicación, Capacitación y Cultura del Agro.

Existe el Programa para la recuperación de suelos degradados, su objetivo es promover la recuperación y/o conservación de los suelos de uso agropecuarios afectados por una fuerte disminución de sus contenidos de fósforo libre o por una acidificación extrema o aquellos que por su fragilidad necesitan ser cultivados mediante prácticas de conservación o disponer de una cubierta vegetal permanente.

El Ministerio de Agricultura ha realizado programas especiales para mujeres y jóvenes rurales: por ejemplo, el concurso nacional de financiamiento de organizaciones productivas de mujeres rurales, con el objetivo de financiar proyectos productivos de organizaciones de pequeños productores agrícolas, constituidas mayoritariamente por mujeres que se encuentran vinculadas al mercado y están desarrollando una actividad económica rentable. Desde 1992 se ejecuta el programa de talleres de formación y capacitación de mujeres rurales, orientado a la capacitación técnico productiva, gestión, capacitación organizacional, formación personal y grupal, y a la generación de iniciativas productivas, con la finalidad de fomentar en las mujeres rurales el interés por la actividad productiva y generar las destrezas y conocimientos necesarios para el desarrollo de iniciativas propias y se incorporen al mercado como productoras. En el marco la Política de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres Rurales, se han realizado programas de capacitación en desarrollo agrícola y rural, con enfoque de género; liderazgo empresarial en mujeres de organizaciones campesinas y capacitación de dirigentes y dirigentes de las Confederaciones Nacionales y Regionales del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile. También se han diseñado e implementado programas para mejorar la inserción productiva y laboral de los jóvenes rurales, a través del estímulo y apoyo a la generación de autoempleo mediante la creación de microempresas juveniles. Los programas contemplan capacitación técnica y en gestión de negocios, crédito y asistencia técnica para desarrollar iniciativas propias, individuales o asociativas.

Programas y proyectos: El objetivo general de la política agrícola del Gobierno, implementada por el Ministerio de Agricultura, es apoyar el desarrollo del sector, de modo tal que éste logre un desempeño rentable y competitivo, acorde con las dinámicas de desarrollo sustentable en el largo plazo, incorporando en su proceso de transformación y crecimiento a los pequeños y medianos productores. Para el cumplimiento de este objetivo, se desarrollan líneas de acción en diferentes ámbitos, entre las cuales cabe mencionar: el perfeccionamiento de mercados que contempla -entre otras- acciones orientadas a certificación de calidad, creación de bolsas de productos agrícolas, desarrollo de sistemas eficientes y de amplio acceso a la información de mercados; la productividad de los recursos naturales y sustentabilidad ambiental, en este ámbito se han desarrollado acciones tendientes a la adecuación de instrumentos legales forestales con el propósito de conservar o recuperar el recurso suelo en zonas de baja potencialidad agronómica y desprovistas de una cubierta vegetal adecuada, estimulando el desarrollo de plantaciones forestales y facilitando la incorporación de los pequeños y mediano productores de esta actividad; y desarrollo de instrumentos legales que apuntan a un manejo sustentable del bosque nativo y fauna silvestre nacionales; sistemas de áreas silvestres protegidas, públicas o privadas, para la conservación del patrimonio natural; se ha establecido un programa de recursos genéticos; programa de producción agrícola orgánica; defensa del patrimonio fito y zoonosanitario; desarrollo de criterios e indicadores para el manejo forestal sustentable; y un plan de lucha contra la desertificación; el acceso a las fuentes de financiamiento, la transformación productiva requiere de la materialización de inversiones en el mediano y largo plazo orientadas a incrementar la productividad del conjunto de factores involucrados en los distintos actividades sectoriales, para lo cual se están realizando acciones para

mejorar la articulación de los productores con el sistema financiero, mediante el desarrollo de instrumentos que estimulen a la banca a participar en este esfuerzo.

Situación general: No hay información disponible.

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: El Ministerio de Agricultura ha desarrollado líneas de acción en materia de innovación y desarrollo tecnológico, que incluyen tanto la movilización de recursos y capacidades de los organismos públicos involucrados en la gestión agrícola, como también la acción de otros componentes del sistema de apoyo a la innovación con incidencia directa en el sector, como la introducción, mejoramiento y adaptación de productos, procesos y tecnologías; mejoramiento de las capacidades de las instituciones dedicadas a la investigación aplicada; fortalecimiento de los programas de transferencia tecnológica que desarrolla el Ministerio orientados a los pequeños y medianos productores; y facilitando el acceso de los pequeños y medianos productores a los diversos instrumentos de apoyo a la innovación y transferencia tecnológica.

Información: No hay información disponible.

Investigación y tecnologías: No hay información disponible.

Financiación: No hay información disponible.

Cooperación: No hay información disponible.

* * *

CAPÍTULO 15: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Adopción de decisiones: Le corresponde a CONAF administrar el SNASPE. Las acciones de normativas y de estudios se realizan en conjunto con CONAMA. Para hacer efectivas las normas de CITES y apoyar la conservación de la biodiversidad, el SAG ha promulgado una nueva Ley de Caza (No 19473), cuyo reglamento está contenido en el Decreto Supremo No 5, de 1998 de MINAGRI.

A través de CONAMA, el Gobierno elaboró la Estrategia Nacional para la Conservación y Utilización Sustentable de la Biodiversidad en Chile, proceso que contó con la participación de representantes del sector público (MINAGRI, Subsecretaría de Pesca, Ministerio de Minería, Ministerio de Bienes Nacionales, MINVU, MINEDUC, MOP), como también de representantes del sector privado, universidades e institutos de investigación, ONGs y organizaciones de base de todo el país. Actualmente el documento de estrategia se encuentra en proceso de revisión final, el que una vez finalizado permitirá continuar con la priorización de los programas y el desarrollo de los planes de acción. Las ONGs y las instituciones de ciencia y tecnología han participado activamente en la elaboración de los diversos estudios y en la preparación de la estrategia para la conservación de la biodiversidad.

Programas y proyectos: Programas específicos de promoción de actividades de conservación de la biodiversidad ex situ se han facilitado con la creación de la Curaduría Nacional de Recursos Fitogenéticos por parte del INIA; y programas específicos de recuperación de flora y fauna amenazada por parte de CONAF.

Situación general: No hay información disponible.

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: No hay información disponible.

Información: Diversas acciones se han emprendido también en materia de información y conocimiento respecto a la diversidad biológica del país, como el documento sobre Diversidad Biológica en Chile de CONICYT; la publicación del Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile, de CONAF, cuyo objetivo es incorporar los sitios identificados en el SNASPE; y se encuentra en su etapa final el Estudio País sobre la Diversidad Biológica en Chile, elaborado por CONAMA; además del Catastro de y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (mencionado en el capítulo 11). Con la finalidad de actualizar las clasificaciones existentes, CONAMA coordina la elaboración de una metodología que permita la clasificación de las especies de flora y fauna silvestres nativas de Chile en las categorías que establece la ley Bases Generales del Medio Ambiente.

Como parte de las iniciativas que surgen del Convenio sobre Diversidad Biológica, la CONAMA ha puesto en marcha el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad en Chile (Proyecto BDM), financiado en forma conjunta con el PNUD y el GEF. El proyecto se propone fortalecer a las instituciones nacionales que se ocupan de la biodiversidad a través de la generación, procesamiento y difusión de información sobre biodiversidad, en un sistema que potencie las capacidades de planificación y brinde apoyo a la toma de decisiones a nivel público y privado. El sistema de administración de datos sobre biodiversidad cuenta con la participación de las principales instituciones chilenas cuyo quehacer se relaciona con este tema (organismos públicos, universidades privadas y estatales, centros de estudios y organismos no gubernamentales) y es coordinado por CONAMA.

Investigación y tecnologías: No hay información disponible.

Financiación: No hay información disponible.

Cooperación: La Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) fue ratificada en el año 1975 y, el Convenio sobre la Diversidad Biológica fue ratificado en el año 1994

CAPÍTULOS 16 Y 34: GESTIÓN ECOLÓGICAMENTE RACIONAL DE LA BIOTECNOLOGÍA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, COOPERACIÓN Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD

Adopción de decisiones:

Tecnologías: En 1997 el Gobierno, a través de MINECON, inició la ejecución de la Política de Fomento a la Producción Limpia, cuyo plan de acción 1997-2000 contuvo cuatro grandes lineamientos: (i) integrar, adaptar, y desarrollar instrumentos de fomento a la producción limpia (iniciativas tales como masificar acciones de transferencia tecnológica, crear mercados de servicios tecnológicos en producción limpia y favorecer la investigación y desarrollo en este ámbito); (ii) impulsar la cooperación para la producción limpia (ya se ha constituido un comité público-privado cuyo accionar está orientado al análisis de alternativas de políticas, emprender acciones conjuntas y definir prioridades); (iii) fortalecer la infraestructura tecnológica y de información (contempla acciones de impulso a una red de centros tecnológicos de producción limpia, la difusión de metodologías estandarizadas de producción limpia y la promoción de programas de capacitación); y (iv) fortalecer la gestión pública en el fomento de la producción limpia (por ejemplo, a través de la integración de objetivos y metas de producción limpia en todos los programas de fomento productivo y de infraestructura, fortalecimiento del rol de información de las entidades de regulación y fiscalización, y adaptación de las políticas de fomento de la PYME a los propósitos de producción limpia). Las iniciativas en esta área se resumen en la elaboración de una Política de Certificación de la Calidad Ambiental de los Productos Chilenos (ver capítulo 4), que está siendo elaborada por CONAMA y la Política de Fomento a la Producción Limpia de MINECON. El INN, junto con CONAMA y MINECON están promoviendo la certificación de la norma ISO 14000, si bien es un proceso que recién está iniciándose en Chile y pocas empresas han logrado ya dicha certificación, si bien el interés y la demanda por obtenerla es creciente, en especial por parte de las grandes empresas. Las Políticas de Apoyo a la Pequeña Empresa, que forma parte de las políticas de desarrollo productivo de MINECON, que entre sus objetivos incluye mejorar el acceso a la tecnología, la innovación y al crédito. La CNE y CORFO a través de un convenio marco para la optimización de la gestión energética de las PYME, realizan actividades de diagnósticos, capacitación, y campañas informativas y de sensibilización.

En 1992 se creó el Programa de Innovación Tecnológica (PIT), que para su segunda fase 1996-2000 tuvo como misión principal impulsar el desarrollo de la innovación tecnológica en el sector productivo nacional, para conformar un Sistema Nacional de Innovación, con una presencia significativa del sector privado y con un sector público modernizado.

Biotechnología: El Programa Nacional de Biotecnología Agropecuaria y Forestal es administrado por la FIA del Ministerio de Agricultura. En el ámbito del Protocolo de Seguridad en la Biotecnología participa CONAMA, SAG, INIA y el Ministerio de RREE.

Programas y Proyectos:

Tecnologías: No hay información disponible.

Biotechnología: Considerando que la biotecnología es esencial para el futuro del sector agrícola nacional y atendiendo al potencial de recursos humanos y agroecológicos del país, como también a las actuales limitaciones (insuficiencia y falta de coordinación de la capacidad científica en este ámbito), en marzo de 1995 se inicia el Programa Nacional de Biotecnología Agropecuaria y Forestal, implementado por el Ministerio de Agricultura a través de la Fundación para la Innovación Agraria. El programa fue formulado a petición de asistencia técnica del Ministerio a la FAO y tiene como objetivo general apoyar la biotecnología agrícola, acentuar la competitividad y estimular la innovación tecnológica del sector agrícola chileno, para elevar su calidad y agregar valor a sus productos de exportación, incrementando al mismo tiempo su diversidad y mejorando el medio ambiente. El programa provee de recursos económicos a proyectos, teniendo como criterios de selección la productividad y el mérito científico y la colaboración entre científicos e instituciones, como también la interacción entre los sectores privado, gubernamental y académico. Puesto que los recursos son limitados, se han establecido como áreas prioritarias la transferencia de genes, biología celular, análisis del genoma e informática; prioridades que deberán incluir las especies de importancia para la agricultura y el desarrollo y la conservación de los recursos genéticos chilenos para las futuras generaciones. El programa está orientado también a promover la sensibilización de científicos y administradores sobre derechos de patentes y responsabilidades, propiciando que estas regulaciones

consideren tanto las pruebas como la comercialización de los productos biotecnológicos, particularmente los organismos genéticamente identificados.

Situación general: *Tecnologías:* Los propósitos de la política tecnológica han sido: incrementar substantivamente el rol de las empresas privadas en actividades básicas y avanzadas de innovación tecnológica (apoyando el surgimiento de una masa crítica de empresas innovadoras que rutinariamente realizan I+D y apoyando el desarrollo de las empresas como factor de demanda tecnológica organizada, que realiza acciones conjuntas en innovación, contratando proyectos de I+D y otros servicios tecnológicos); orientar la investigación y desarrollo hacia la innovación (impulsando proyectos I+D orientados a combinar la excelencia científica con relevancia económica, facilitando el acercamiento de universidades con empresas (impulsando proyectos de I+D precompetitivos con impacto genérico más inmediato en los sectores productivos y apoyando la investigación para efectos de información relevante, con calidad y actualidad tanto para los agentes económicos como para el sector público); fortalecer la infraestructura tecnológica nacional, apoyando la modernización de los institutos tecnológicos públicos, fomentando la creación de empresas de servicios tecnológicos e impulsando la conformación de una red de centros tecnológicos públicos y privados; apoyar la modernización de las instituciones públicas y de los instrumentos relacionados con el impulso y la difusión de la innovación tecnológica e Chile (para ello el PIT tiene inserto en su estructura un sistema permanente de evaluación y de "antenas" sobre otras experiencias avanzadas en el mundo); desarrollar instrumentos para incrementar el rol del sistema financiero en el proceso de innovación, como es el caso de la industria de capital de riesgo; impulsar la formación de recursos humanos de alta calidad (científicos, investigadores, ingenieros, profesionales y trabajadores calificados); y desarrollar una infraestructura de información de cobertura nacional que incorpore a las PYME en todas las regiones del país.

Biotechnología: En el ámbito de la bioseguridad se han establecidos diversas instancias de discusión y trabajo: el Comité de Liberación de Transgénicos de Origen Vegetal (CALT) creado por el SAG, y que busca reducir los riesgos asociados a la liberación de dichos organismos; y el Grupo de Trabajo Especial, de composición abierta sobre seguridad de la biotecnología, de acuerdo a la decisión II/5 de la segunda reunión de la conferencia de las partes del Convenio de Diversidad Biológica. Para facilitar el intercambio de información pertinente al registro internacional del PNUMA sobre seguridad en la biotecnología, CONAMA ha establecido la conexión electrónica vía Internet, al igual que con la Red Interamericana sobre Biodiversidad (IABIN-OEA) y el mecanismo de facilitación de transferencia en ciencia y tecnología o CHM del Convenio sobre Diversidad Biológica.

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia:

Tecnologías: No hay información disponible.

Biotechnología: La concepción del Programa Nacional de Biotecnología Agrícola está orientada a respaldar fuertemente la capacidad científica del país mediante proyectos de entrenamiento de graduados, otorgamiento de becas postdoctorales y la realización de períodos cortos de entrenamiento. CONAMA ha desarrollado talleres de capacitación en los temas de componentes genéticos de la biodiversidad y seguridad en la biotecnología.

Información:

Tecnologías: Como medios de difusión, el PIT cuenta con publicaciones periódicas y con un sitio web que permite acceder a la red de centros tecnológicos. El posterior establecimiento de la política de producción limpia conlleva a que el PIT incluya en todas sus acciones la introducción de las consideraciones ambientales.

Biotechnología: No hay información disponible.

Investigación y tecnologías:

Tecnologías: No hay información disponible.

Biotechnología: No hay información disponible.

Financiación:

Tecnologías: Los fondos tecnológicos son los instrumentos con los que cuenta el PIT para lograr su misión y es enteramente financiado por recursos provenientes del presupuesto nacional: Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo (FONTEC), de CORFO, que promueve la innovación tecnológica en empresas productivas, otorgando subsidios que financien parte de la ejecución de proyectos de innovación e infraestructura

tecnológica, para elevar el nivel de competitividad de las empresas, incrementar su productividad y mejorar la calidad de sus productos; Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF) de CONICYT, cuyo objetivo es fortalecer y aprovechar el potencial de innovación tecnológica existente en las instituciones de investigación nacionales; Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI) de CORFO, que impulsa proyectos de innovación y cambio tecnológico en áreas de impacto estratégico en el desarrollo económico y social del país; Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura, que impulsa y coordina acciones de desarrollo científico-tecnológico para incorporar innovación en los procesos productivos y de transferencia en los sectores agrícola, agroindustrial, forestal y ganadero; Fondo de Investigaciones Mineras (FIM) del CIMM, que lleva a cabo investigaciones científicas y tecnológicas relativas al cobre y sus subproductos; y el Subsidio financiero para Proyectos de Conversión tecnológica (TECFIN) de CONAMA, que promueve la introducción de nuevas tecnologías o cambios en el proceso productivo vigente, estimulando el proceso de transición hacia tecnologías definitivas no destructoras de la capa de ozono.

Biotecnología: No hay información disponible.

Cooperación:

Tecnologías: No hay información disponible.

Biotecnología: No hay información disponible.

* * *

CAPÍTULO 17: PROTECCIÓN DE LOS OCÉANOS Y DE LOS MARES DE TODO TIPO

Adopción de decisiones: La Subsecretaría de Marina determina las áreas protegidas, parques y reservas marinos y áreas de manejo. Le corresponde además el control, fiscalización y supervigilancia de toda la costa, mar territorial de la República, de los ríos y lagos navegables. Facultad privativa de conceder el uso de playas, terrenos de playa, fondo de mar, porciones de agua y rocas para uso privado y de concesiones mineras y de acuicultura. La Subsecretaría de Pesca (dependiente del Ministerio de Economía): propone al Ministro la política pesquera nacional, sus reglamentos de ejecución y fiscalización, las normas de protección, de control y de aprovechamiento racional de los recursos hidrobiológicos. Le corresponde dar autorización de los permisos -de extracción e instalación- y la regulación de las actividades pesqueras económicas, recreativas y deportivas; orientar al sector industrial hacia un aprovechamiento eficiente de los recursos pesqueros; promover y coordinar la investigación que requiera el sector pesquero; y elaborar y difundir información sobre el sector. El Servicio Nacional de Pesca ejecuta la política pesquera nacional. A la DIRECTEMAR le corresponde fiscalizar, aplicar y hacer cumplir todas las normas nacionales, leyes y convenios internacionales ratificados por Chile relacionados con la protección de la vida humana, el medio ambiente, los recursos naturales y regular las actividades que se desarrollan en el ámbito acuático de su jurisdicción. Control de la contaminación sobre el mar, ríos y lagos navegables. Seguridad de la Navegación. Fiscalización y control de playas, terrenos de playa fiscales, de lagos y ríos navegables y mares interiores. El CONAMA promueve la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo y coordina acciones derivadas de las políticas y estrategias definidas por el Gobierno en materia ambiental. Coordina el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). A la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero le corresponde proponer una zonificación de los diversos espacios que conforman el Borde Costero del Litoral de la república, teniendo en consideración los lineamientos básicos contenidos en la zonificación preliminar elaborada por el Ministerio de Defensa Nacional (Subsecretaría de Marina); elaborar un informe para la evaluación, al menos cada dos años, de la implementación de la Política, y proponer los ajustes que correspondan; Formular proposiciones, sugerencias y opiniones a las autoridades encargadas de estudiar y aprobar los diversos Planes comunales e Intercomunales, a fin de que exista coherencia en el uso del borde costero del litoral; proponer soluciones a las discrepancias que se susciten respecto del mejor uso del borde costero del litoral, que la autoridad competente someta a su consideración; recoger los estudios que los diversos órganos de la Administración del Estado realicen sobre el uso del borde costero del litoral; y Formular recomendaciones, dentro del ámbito de su competencia, a los órganos de la Administración del Estado. Para la realización de estas funciones, las instituciones mencionadas se apoyan en las actividades de otras Instituciones e Instancias, como los Servicios de Salud (regionales) que manejan los informes sanitarios sobre efectos del sector industrial y control de efluentes y la SISS que fiscaliza el control de fluentes hacia aguas costeras; el SHOA y el IFOP que proporcionan elementos e información técnico-científica necesaria para la toma de decisiones.

A nivel nacional, la Subsecretaría de Pesca ha establecido un grupo formal de trabajo en Asuntos Ambientales, orientado tanto a la acuicultura como a las pesquerías. Este grupo tiene como objetivo dar cumplimiento práctico a los compromisos suscritos en la Agenda 21 y principalmente a la legislación ambiental nacional. Entre las actividades prioritarias cabe mencionar la elaboración del Reglamento Complementario a la Ley de Pesca y Acuicultura para la formación de parques y reservas marinas y la reestructuración final del nuevo reglamento ambiental para la acuicultura, complementario a la Ley de Pesca.

Programas y proyectos: No hay información disponible.

Situación general: No hay información disponible.

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: No hay información disponible.

Información: No hay información disponible.

Investigación y tecnologías: No hay información disponible.

Financiación: No hay información disponible.

Cooperación: Chile participa activamente en el Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las Areas Costeras del Pacífico Sudeste, de la CPPS, siendo la autoridad marítima el punto focal nacional ante este organismo y la Organización Marítima Internacional (OMI). Chile participa, además, en el Sistema Mundial de Observación de los Océanos y en varios programas internacionales de cooperación científica. A través de la Subsecretaría de Pesca participa en el Grupo de Trabajo sobre Conservación de Recursos Marinos de APEC.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar fue firmada y ratificada en 1997, entrando en vigencia el 24 de septiembre de ese año. Chile ha ratificado diversos convenios internacionales relacionados con este capítulo: Convención Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados por Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos, ratificada en 1977; Convención sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, ratificada en 1977; Convención para la Protección del Medio Ambiente Marino y Zona Costera del Pacífico Sudeste; Acuerdo sobre Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburo y Otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia, ratificado en 1986 y su protocolo complementario en 1987; Protocolos para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres y sus Anexos, ratificado en 1986; Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva, 1992; Convenio Internacional relativo a la Intervención en Alta Mar en Casos de Accidentes que causen Contaminación por Hidrocarburos, en 1995; Protocolo relativo a Intervenciones en Alta Mar en casos de Contaminación por sustancias distintas de los Hidrocarburos, en 1973; y el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques, de 1973, y su Protocolo de 1978, ratificado por Chile en 1995.

Desde 1952 Chile, junto a Ecuador, Perú y Colombia, participa en la CPPS, organismo orientado a la coordinación de las respectivas políticas marítimas, especialmente en lo relativo a la conservación de los recursos vivos marinos; y participa del Tratado Antártico de 1959.

* * *

CAPÍTULO 18: PROTECCIÓN DE LA CALIDAD Y EL SUMINISTRO DE LOS RECURSOS DE AGUA DULCE

Adopción de decisiones: En la gestión del recurso agua participan distintas instituciones (MOP, MINSAL, SISS, Subsecretaría de Pesca, DIRECTEMAR), siendo el Código de Aguas el principal instrumento para la gestión de los recursos, y es implementado por la Dirección General de Aguas (DGA) del MOP, entre cuyas funciones están la planificación del desarrollo de recursos en las fuentes naturales, la investigación y medición del recurso, el ejercicio de la política y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público y la supervisión del funcionamiento de las juntas de vigilancia. Los aspectos normativos y de formulación de políticas son coordinados por CONAMA.

En materia de la gestión ambiental del recurso agua, actualmente regida por un marco normativo amplio y disperso en distintos cuerpos legales sectoriales, CONAMA elaboró en 1998 una propuesta de política para la Gestión Integrada del Recurso Agua (que incluye ríos, lagos, lagunas paleolíticas o salares, humedales y acuíferos o aguas subterráneas, excluyendo aguas marinas y mar interior), actualmente en discusión, cuyos objetivos estratégicos son: incorporar en los cuerpos normativos vigentes y en la gestión del recurso hídrico el enfoque ecosistémico y los costos ambientales en el marco de equidad intra e intergeneracional; desarrollar un sistema de coordinación de los agentes públicos relacionados con el agua, con el fin de avanzar hacia una gestión pública eficiente y efectiva, con la convergencia de los diversos intereses privados para el mejor aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos del territorio nacional; desarrollar e implementar una estrategia que conduzca en el menor plazo realista, a la modificación substancial del actual Código de Aguas; mejorar el nivel de conocimiento y el manejo de información como bases para la gestión de los recursos hídricos; y enfrentar, mediante el desarrollo de políticas específicas, aquellos problemas más críticos de gestión de los recursos hídricos, colocando especial atención a la recuperación de una o dos de las cuencas en estado crítico.

En la discusión de las propuestas de normas y políticas además de las instituciones públicas involucradas, participan todos los sectores representados en el Consejo Consultivo de CONAMA (ONGs, instituciones de ciencia y tecnología, sector privado, trabajadores).

Programas y proyectos: No hay información disponible.

Situación general: Los recursos hídricos del país han mostrado niveles de deterioro en su calidad y una seria disminución de la oferta natural del recurso en amplias zonas del territorio nacional. La calidad ha sido afectada por las emisiones de residuos líquidos de origen industrial, sustancias orgánicas y por prácticas asociadas a los procesos silvoagropecuarios, mineros y agrícolas. Las acciones emprendidas por la autoridad ambiental en esta materia son la elaboración del Catastro Nacional de Descargas de RILES, que ha permitido una cuantificación e identificación de tipos de RILES, y de dónde y cuándo se evacúan; la evaluación de las redes de monitoreo de los recursos hídricos; la puesta en vigencia de la primera norma de emisión de efluentes a sistemas de alcantarillado; la norma de descarga de residuos líquidos a aguas superficiales, continentales e insulares (en trámite); estudios limnológicos de algunos lagos de la zona sur del país; el diagnóstico de contaminación de aguas continentales; y la estandarización de métodos de medición de contaminantes.

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: No hay información disponible.

Información: No hay información disponible.

Investigación y tecnologías: No hay información disponible.

Financiación: No hay información disponible.

Cooperación: No hay información disponible.

* * *

CAPÍTULO 19: GESTIÓN ECOLÓGICAMENTE RACIONAL DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS TÓXICOS, INCLUIDA LA PREVENCIÓN DEL TRÁFICO INTERNACIONAL ILÍCITO DE PRODUCTOS TÓXICOS Y PELIGROSOS

Adopción de decisiones: El Ministerio de Salud, a través de los distintos Servicios de Salud a lo largo del país, es la entidad responsable de la implementación y control de los programas actualmente vigentes. La elaboración, implementación y análisis de propuestas de políticas de carácter intersectorial está bajo la coordinación de la CONAMA. Al mismo tiempo, y con la finalidad de cubrir todos los sectores, CONAMA está finalizando la propuesta para una Política de Gestión Segura de Sustancias Químicas Peligrosas. Desde el punto de vista de las respuestas, en conjunto con la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) del Ministerio del Interior, se está elaborando un Plan de Respuesta para Enfrentar Emergencias y Accidentes por Sustancias Químicas, que incluye un plan a nivel nacional y planes regionales. Esta iniciativa debe aún ser sometida a la aprobación del Consejo de Ministros de la CONAMA. Como parte de este esfuerzo, a nivel nacional se ha estado difundiendo el programa APELL del PNUMA. Por otra parte el sector privado está implementando el Código de Conducta Responsable en las empresas del sector químico y el interés de CONAMA es hacer extensiva esta iniciativa a otras ramas de la producción nacional. Para fortalecer la prevención de riesgos, CONAMA está realizando un estudio para la elaboración de un Catastro de Fuentes Potenciales de Accidentes y Emergencias Tecnológicas de Origen Químico, y está financiando la acreditación de los laboratorios del Centro Nacional del Medio Ambiente de la Universidad de Chile, con el objetivo de mejorar la calidad de la información y de las mediciones.

Programas y proyectos: Para dar cumplimiento a estos compromisos, en los aspectos preventivos, Chile elaboró y ha difundido el Programa Nacional de Control y Manejo Seguro de las Sustancias Químicas, cuyo objetivo general es "lograr un manejo seguro y adecuado de las sustancias químicas peligrosas, desde su producción hasta su eliminación, de manera tal de minimizar los riesgos asociados a su gestión, evitando efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente". En este programa se abordan los distintos compromisos incluidos, como son las emergencias químicas, la revisión, elaboración y actualización de la legislación correspondiente, manejo de información, capacitación y fortalecimiento de la coordinación nacional. El programa ya está ejecutando varias de sus líneas de acción a cargo del Ministerio de Salud.

Situación general: No hay información disponible.

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: CONAMA está financiando un proyecto para la acreditación internacional de los laboratorios del Centro Nacional del Medio Ambiente, cuyo propósito es dar respaldo de calidad de la información nacional generada para fines de medición de parámetros de calidad de diferentes medios ambientales.

Información: No hay información disponible.

Investigación y tecnologías: No hay información disponible.

Financiación: No hay información disponible.

Cooperación: En el ámbito de la cooperación internacional, Chile participó activamente en el Comité Internacional para la Negociación de un Instrumento Jurídicamente Vinculante para el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo de Ciertos Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional (PIC), actividad que se concretó en el Convenio de Rotterdam, que fue firmado por Chile en septiembre de 1998. Actualmente se están realizando los ajustes jurídicos y administrativos para la implementación del Convenio. Al mismo tiempo, Chile está participando activamente en el Comité Internacional para la Negociación de un Instrumento Vinculante para la Prohibición y Restricción del Uso de Compuestos Orgánicos Persistentes (POPs), la elaboración del informe-país para este Comité está a cargo de un grupo de trabajo multisectorial, bajo la coordinación de CONAMA. Paralelamente, se ha iniciado la elaboración de un perfil nacional de los POPs a fin de implementar los

compromisos que resulten del Convenio y, siguiendo los acuerdos del Foro Intergubernamental de Seguridad Química, Chile está elaborando el Perfil Chileno de Seguridad Química, actividad en la cual participan instituciones públicas y no gubernamentales.

* * *

CAPÍTULO 20 A 22: GESTIÓN ECOLÓGICAMENTE RACIONAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS, SÓLIDOS Y RADIATIVOS

Adopción de Decisiones:

Desechos peligrosos: Le corresponde al Ministerio de Salud reglamentar el manejo (almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final) de los residuos peligrosos, así como controlar que dicho manejo sea adecuado y no exponga a riesgos la salud de la población. Los proyectos para instalaciones de manejo de residuos deberán ingresar al SEIA y su aprobación corresponde a la COREMA.

Adicionalmente, se encuentra en elaboración en CONAMA una Política Nacional sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos No Domiciliarios, cuyo objetivo general es asegurar la gestión ambientalmente adecuada de los residuos sólidos generados en el país, considerando aspectos técnicos, económicos y sociales acordes con la realidad nacional, promoviendo la minimización de los residuos (cantidad y peligrosidad) y el adecuado tratamiento y disposición final. Además de la elaboración de la reglamentación, las tareas pendientes se relacionan con el fortalecimiento de los servicios de salud para el control de los residuos peligrosos y el establecimiento de un inventario de este tipo de sustancias, que identifique los tipos y cantidades de residuos peligrosos que se generan en el país. En elaboración se encuentra el Proyecto de Reglamento sobre Manejo Sanitario de Residuos Peligrosos, elaborado por el Ministerio de Salud, que establece las condiciones sanitarias y de seguridad mínimas a las cuales deberá someterse la acumulación, recolección, selección, transporte, comercialización, reutilización, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos; exige la implementación de un Plan de Manejo de los Residuos Peligrosos a aquellos generadores que superen los 12 kilogramos de residuos tóxicos agudos o 12 toneladas de residuos peligrosos. El reglamento considera también la obligación de información a través de un Sistema de Declaración y Seguimiento (actualmente existe un sistema de declaración para todo tipo de residuos sólidos sólo en la Región Metropolitana del país). La implementación y fiscalización de este Reglamento una vez aprobado, será responsabilidad del Ministerio de Salud.

Desechos sólidos: Le corresponde al Ministerio de Salud reglamentar los aspectos técnico-sanitarios del manejo de los residuos sólidos. La recolección y disposición final de los residuos sólidos recolectados es responsabilidad de los municipios. Todo proyecto de plantas de transferencia, tratamiento y disposición final ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental de CONAMA.

Las acciones emprendidas en este ámbito incluyen la Política sobre Gestión Integrada de Residuos Sólidos Domiciliarios, propuesta por CONAMA y aprobada por el Comité de Ministros de Desarrollo Productivo en 1997, cuyo objetivo central es lograr una gestión que minimice el impacto ambiental, elimine los efectos negativos sobre la salud de la población y que sea social y económicamente eficiente y viable. Si bien la política no señala la minimización de desechos como un objetivo explícito, sí considera la elaboración de propuestas relativas a fomento y promoción de minimización, reciclaje y reutilización, estimulando la participación ciudadana. A partir de la aprobación de esta política se ha avanzado en la elaboración de un programa de implementación específico para cada una de las actividades. Otra iniciativa es la propuesta de Política Nacional para la Gestión de los Residuos Sólidos No Domiciliarios (industriales, hospitalarios y mineros) también elaborada por CONAMA, que promueve la minimización de los residuos y fomenta el adecuado tratamiento y disposición final de éstos, para proteger la salud de las personas y evitar el deterioro ambiental generado por un manejo deficiente.

Existen varias iniciativas de programas de reciclaje a nivel comunal y regional, si bien su aplicación es todavía muy localizada en algunas localidades y regiones. Las dificultades que usualmente enfrentan estas iniciativas es la estimación de la rentabilidad de dichos programas (que no suele estar analizada en términos comparativos con el costo del manejo tradicional). Dada la relevancia que este tema tiene en la Región Metropolitana, donde se concentra gran parte de la población nacional, el Gobierno Regional ha financiado un programa de reciclaje durante los últimos dos años, que ha incluido como componentes principales programas de educación y difusión, bajo la coordinación de la autoridad regional de CONAMA.

Desechos radiactivos: La autoridad competente es la CCHEN, quien tiene la misión de regular y controlar los materiales radioactivos con el objeto de dar protección y seguridad a la población, los bienes y el medio ambiente, siendo la Unidad de gestión de Desechos Radioactivos (UGDR) que depende del departamento de Seguridad Nuclear y radiológica, la instancia responsable de las actividades de recolección, tratamiento, acondicionamiento,

transporte y almacenamiento de los desechos radioactivos generados por aplicaciones de la energía nuclear en el país.

En Chile existe normativa específica sobre Gestión de Desechos Radioactivos (NCS-DR-01) y de Seguridad Nuclear (Ley No 18302) elaborada por CCHEN, institución que cuenta con una infraestructura orientada al almacenamiento para decaimiento de desechos radioactivos, planta de tratamiento de desechos radioactivos con laboratorios de control de procesos y experimentación, almacenamiento temporal de desechos acondicionados, y laboratorio de segregación y caracterización, que constituyen una opción de almacenamiento para las empresas públicas y privadas que generan este tipo de desechos.

Programas y proyectos:

Desechos peligrosos: No hay información disponible.

Desechos sólidos: No hay información disponible.

Desechos radiactivos: No hay información disponible.

Situación general:

Desechos peligrosos: No hay información disponible.

Desechos sólidos: En Chile la recolección de residuos sólidos domiciliarios en sectores urbanos es cercana al 100% y la disposición final sanitaria se estima en aproximadamente un 80%, el 20% restante corresponde en general a pequeñas localidades urbanas, con menos de 20 mil habitantes y de ingresos bajos, que no pueden acceder a rellenos sanitarios convencionales debido a los costos que ello involucra. Para el año 1999-2000 está prevista la dictación del Reglamento sobre Manejo Sanitario de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables, elaborado por el Ministerio de Salud. El reglamento contempla un Plan de Acción para el mejoramiento de la disposición final de los residuos sólidos destinado a mejorar la operación de aquellas instalaciones que presenten un manejo deficiente. Las principales estrategias se orientan al fortalecimiento de la fiscalización y a la comunicación de riesgos a la población. Se está avanzando también en la elaboración de programas de capacitación sobre disposición final sanitaria a través de rellenos sanitarios manuales en pequeñas localidades urbanas.

Desechos radiactivos: Los desechos radioactivos de período mayor a 100 días reciben tratamiento (reducción de volumen), inmovilización con cementos nacionales y acondicionamiento para almacenamiento (temporal) en instalaciones ad-hoc. Los desechos radioactivos de período de duración menor a 100 días son segregados según sus características físicas y radiológicas, almacenados bajo registro para decaimiento natural y evacuación como basura común, una vez que no presentan riesgo radiológico (la evacuación se realiza después de la compactación, para disminuir volumen, cuando la tasa de exposición es hasta 2.5 veces el nivel de fondo o si su actividad ha decaído a niveles de exención, es decir, cuyo riesgo radiológico asociado es bajo).

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia:

Desechos peligrosos: No hay información disponible.

Desechos sólidos: No hay información disponible.

Desechos radiactivos: CCHEN dicta periódicamente cursos de capacitación para trabajadores públicos y privados que requieren una autorización para trabajar con material radioactivo, y a través de sus Jornadas de Gestión de Desechos Radioactivos, la UGDR capacita a personal de las instalaciones usuarias que generan permanentemente estos desechos, como por ejemplo el sector salud (hospitales, clínicas públicas y privadas, laboratorios), industrial (procesadoras de madera, químicos, alimentos, minería), y de investigación (universidades).

Información:

Desechos peligrosos: No hay información disponible.

Desechos sólidos: No hay información disponible.

Desechos radiactivos: No hay información disponible.

Investigación y tecnologías:

Desechos peligrosos: No hay información disponible.

Desechos sólidos: No hay información disponible.

Desechos radiactivos: No hay información disponible.

Financiación:

Desechos peligrosos: No hay información disponible.

Desechos sólidos: No hay información disponible.

Desechos radiactivos: Además del presupuesto de la CCHEN, las actividades se financian a través de Proyectos de Cooperación Técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Cooperación:

Desechos peligrosos: El Convenio de Basilea fue firmado en 1990 y ratificado en 1992. El último informe se presentó a la Secretaría del Convenio en 1998. Desde la ratificación este Convenio, Chile ha estado trabajado en la creación de los procedimientos que permitan implementar de manera eficaz el convenio y promover los principios y objetivos que de él se desprenden. Actualmente se encuentra en trámite en el Congreso Nacional un proyecto de ley que tiende a prohibir el ingreso al territorio nacional de desechos peligrosos provenientes de terceros países. Por esta vía se pretende controlar y sancionar el posible tráfico ilícito de desechos peligrosos en el país.

Desechos sólidos: No hay información disponible.

Desechos radiactivos: La UGDR ha sido nominada por el OIEA como Centro de Demostración de Procedimientos y Métodos Previos a la Evacuación en la Gestión de Desechos Radioactivos. Los profesionales de la UGDR dan capacitación a países de América Latina y el Caribe en esta materia.

* * *

CAPÍTULO 24 A 32: FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LOS GRUPOS PRINCIPALES

Mujeres: Adopción de decisiones: En 1992 se crea el SERNAM, con la misión de colaborar en el diseño y la coordinación de políticas públicas que pongan fin a los niveles de discriminación que afectan a las mujeres en los ámbitos familiar, social, económico, político y cultural. Para ello SERNAM elaboró un Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 1995-2000, y cuenta, además, con una propuesta de Políticas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres Rurales (ver capítulo 14). A partir de los compromisos adquiridos en este Plan ya se han concretado diversas iniciativas legales en favor de la mujer, tales como la modificación de la Constitución para establecer la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, ampliando la procedencia del recurso de protección a las discriminaciones en contra de las mujeres. Cooperación: La Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer se ratificó en diciembre de 1989.

Infancia y juventud: Adopción de decisiones: Desde 1991, el Gobierno ha impulsado diversos programas de apoyo a la integración de los jóvenes al desarrollo nacional. Se creó el INJUV, cuya misión es asesorar al Gobierno en el diseño, planificación y coordinación de políticas relativas a los asuntos juveniles (investigando los temas de salud, empleo e inserción laboral, justicia, deporte, recreación y cultura). En el área de Políticas de Juventud los objetivos son el análisis de la oferta gubernamental dedicada a los jóvenes, la construcción de un índice de focalización e inversión en jóvenes, el análisis de su participación política, continuar con la Encuesta Nacional de la Juventud. Estos aspectos serán concretados en el Sistema Nacional de Información y Derechos Juveniles, que impulsará puentes comunicacionales que vinculen a los jóvenes con las oportunidades y servicios ofrecidos en el sector privado y estatal. Programas y Proyectos: El FOSIS ha implementado programas orientados a la participación de los jóvenes en actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas en general, como parte de un proceso educativo de participación (Programa Local de Desarrollo Juvenil y Encuentro Joven). Para el caso de la infancia se han implementado los Programas de Mejoramiento de Atención a la Infancia (en conjunto con MINEDUC), que da atención preescolar a niños de sectores pobres en modalidades no convencionales que involucren a la comunidad, y el Programa de Acción Local de la Infancia, que apoya iniciativas para el desarrollo de la infancia y el respeto a sus derechos, estimula la capacidad de gestión local-comunal en infancia, el desarrollo de iniciativas innovadoras y comunitarias en temas que aquejan a niños y niñas. Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: Se han implementado programas de capacitación para el trabajo y apoyo en su inserción laboral a jóvenes de escasos recursos y que estén fuera del sistema escolar y laboral formal (Programa de Capacitación Laboral de Jóvenes y Contrato de Aprendizaje, Chile Joven, administrados por SENCE y Buen Futuro, promovidos por el FOSIS).

Poblaciones indígenas: Adopción de decisiones: En 1993 se promulgó la Ley Indígena, cuya discusión se inició en 1990 y que involucró a todos los pueblos indígenas del país. La implementación y la fiscalización de las disposiciones contenidas en la ley y de la incorporación de consideraciones particulares en el diseño de las políticas públicas le corresponde a CONADI, que inició sus funciones en 1994, siendo su objetivo general promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural, y de impulsar su participación en la vida nacional.

Organizaciones no gubernamentales: Situación general: Las ONGs integran los Consejos Consultivos Nacional y regionales de CONAMA y el CDS. Son consultoras en actividades de participación ciudadana en SEIA y contraparte técnica de proyectos del FPA. Actúan en seminarios y eventos de difusión, capacitación y debates ambientales. Se han realizado Diplomados en Gestión Ambiental exclusivamente para ONG y con otros participantes. Han sido fuente de consulta en la elaboración de las Políticas Ambientales Regionales. De la misma forma, es uno de los sectores más dinámicos en la participación en programas sociales promovidos por el Gobierno, vinculados temáticas sociales y ambientales, a través de los concursos públicos de SERNAM, FOSIS, SENCE, INJUV y CONAMA, entre otros.

Autoridades locales: Adopción de decisiones: Con el objetivo de fortalecer las capacidades y facultades de las autoridades locales el Gobierno promulgó la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que entre sus

reformas considera específicamente la promoción de igualdad entre hombres y mujeres como acción compartida del municipio con otras oficinas nacionales, tales como INJUV y SERNAM.

Sindicatos y patronales: Adopción de decisiones: Se ha impulsado la creación y funcionamiento de mecanismos con participación de los trabajadores dedicados a abordar materias tales como la seguridad laboral y prevención de riesgos (donde se acordó como meta reducir a un dígito la accidentabilidad laboral para el año 2000), capacitación en la empresa, igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y trabajo infantil. También existen instancias tripartitas sectoriales en algunos sectores (forestal, transporte terrestre de carga, textil, los pequeños y medianos empresarios) y se han establecido mecanismos específicos de franquicias tributarias a las empresas por capacitación ocupacional y becas de capacitación para trabajadores desocupados o independientes, administradas por SENCE. En 1994 se crea el Foro Desarrollo Productivo con el objetivo de vitalizar la búsqueda de acuerdos entre empresarios, trabajadores, gobierno y otros actores sociales para el fortalecimiento del desarrollo. Cooperación: Chile ha ratificado todos los convenios de la OIT sobre derechos básicos de los trabajadores, estando en trámite en el Congreso Nacional los convenios Nos 121, 131, 135, 161, y 140, relativos a servicios de salud y acceso a capacitación para los trabajadores, fijación de salarios mínimos y negociación colectiva de funcionarios públicos.

Comercio e industria: No hay información disponible.

Comunidad científica y tecnológica: No hay información disponible.

Agricultores: Adopción de decisiones: La Ley de Bases Generales del Medio Ambiente promulgada en 1994 en su Título V estableció el Fondo de Protección Ambiental, cuyo objetivo es financiar total o parcialmente proyectos o actividades orientadas a la protección o reparación del medio ambiente, la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental. El fondo está formado por herencias, legados y donaciones; recursos destinados para este efecto en la Ley de Presupuestos de la Nación; recursos que se le asignen en otras leyes; cualquier otro aporte proveniente de entidades públicas, privadas, nacionales o extranjeras, a cualquier título. Es administrado por CONAMA a través de concurso de proyectos. En 1994 se crea también el Fondo de Las Américas, que administra un fondo de "endowment" que el año 2002 alcanzará más de 20 millones de dólares, y está orientado a promover actividades que protegen al medio ambiente y a los niños, mirando hacia un país más fecundo y sustentable. El fondo es administrado por un consejo binacional, registrado en Chile y USA. Situación general: El principal cambio ocurrido a partir de 1994 es el establecimiento en el presupuesto nacional del ítem correspondiente a la CONAMA, y los recursos destinados al fortalecimiento de la gestión pública en las áreas de salud y educación, objetivos prioritarios de la política social del Gobierno.

* * *

CAPÍTULO 33: RECURSOS Y MECANISMOS DE FINANCIACIÓN

Adopción de decisiones: La Ley de Bases Generales del Medio Ambiente promulgada en 1994 en su Título V estableció el Fondo de Protección Ambiental, cuyo objetivo es financiar total o parcialmente proyectos o actividades orientadas a la protección o reparación del medio ambiente, la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental. El fondo está formado por herencias, legados y donaciones; recursos destinados para este efecto en la Ley de Presupuestos de la Nación; recursos que se le asignen en otras leyes; cualquier otro aporte proveniente de entidades públicas, privadas, nacionales o extranjeras, a cualquier título. Es administrado por CONAMA a través de concurso de proyectos. En 1994 se crea también el Fondo de Las Américas, que administra un fondo de "endowment" que el año 2002 alcanzará más de 20 millones de dólares, y está orientado a promover actividades que protegen al medio ambiente y a los niños, mirando hacia un país más fecundo y sustentable. El fondo es administrado por un consejo binacional, registrado en Chile y USA.

El principal cambio ocurrido a partir de 1994 es el establecimiento en el presupuesto nacional del ítem correspondiente a la CONAMA, y los recursos destinados al fortalecimiento de la gestión pública en las áreas de salud y educación, objetivos prioritarios de la política social del Gobierno.

Programas y proyectos: No hay información disponible.

Situación general: No hay información disponible.

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: No hay información disponible.

Información: No hay información disponible.

Investigación y tecnologías: No hay información disponible.

Cooperación: No hay información disponible.

* * *

CAPÍTULO 35: LA CIENCIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Adopción de decisiones: Con la finalidad de identificar las acciones que impulsen el desarrollo coordinado y sustentable de la ciencia en el país, en 1995 el Gobierno creó la Comisión Asesora Presidencial en Materias Científicas, cuyas funciones son las de asesorar al Presidente de la República en: La formulación de planes, programas, proyectos y acciones destinadas a crear condiciones que estimulen el desarrollo de la ciencia; Las iniciativas que incentiven la investigación por parte de la comunidad científica; Medidas e instrumentos que sean adecuados para el perfeccionamiento de la actividad científica; Medidas que propendan a mejorar las relaciones entre la actividad científica, la educación en todos sus niveles y la actividad económica; Análisis de las propuestas que sobre las temáticas anteriores surjan de las agencias, consejos y otras instancias de la institucionalidad científica, así como en aquellas materias que el Presidente de la República le solicite.

Los aspectos científicos del desarrollo sostenible han sido incorporados en los distintos programas de CONICYT, instancia que es miembro consultivo del mecanismo nacional para el desarrollo sostenible.

Programas y proyectos: No hay información disponible.

Situación general: No hay información disponible.

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: No hay información disponible.

Información: No hay información disponible.

Investigación y tecnologías: No hay información disponible.

Financiación: No hay información disponible.

Cooperación: No hay información disponible.

* * *

CAPÍTULO 36: FOMENTO DE LA EDUCACIÓN, LA CAPACITACIÓN Y LA TOMA DE CONCIENCIA

Adopción de decisiones: El Gobierno está comprometido con una política de Estado que otorga prioridad al mejoramiento de la educación, estrategia central para el desarrollo del país. Para ello MINEDUC implementó el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la educación (MECE) y puso en marcha en 1996 el proceso de Reforma Educacional para la educación básica y media. El proceso contempla una reforma curricular, que contiene una actualización de la estructura y contenidos y extensión de la jornada escolar y en el fortalecimiento de la capacidad de los docentes, como actores claves de la reforma, estableciéndose una política especial que busca fortalecer su desarrollo profesional y su reconocimiento social. Especial atención se ha dado a grupos vulnerables a través de la ejecución de programas focalizados, como el MECE rural, por ejemplo. Uno de los objetivos principales de la Política Ambiental del Gobierno es el involucramiento ciudadano en la gestión ambiental a través de lineamientos institucionales que conduzcan a procesos de ampliación de las instancias participativas y que generen programas orientados a la modificación de conductas y prácticas que hagan efectiva la co-responsabilidad de los ciudadanos en el cuidado del medio ambiente.

Las ONGs y distintas organizaciones comunitarias participan activamente en actividades de educación no formal y en el desarrollo de una conciencia ambiental. Para ello cuentan con financiamiento a través del Fondos de Protección Ambiental de CONAMA y el Fondo de las Américas (capítulo 30).

Programas y proyectos: Se han promovido proyectos específicos con la publicación de material didáctico en la enseñanza básica y también en la técnica, orientados de preferencia al conocimiento y buen manejo de recursos naturales.

Situación general: La incorporación de la temática ambiental en el curriculum educacional en el contexto de la reforma educacional constituyó uno de las acciones priorizadas en el plan de acción 1998-2000 de la política ambiental del Gobierno. A nivel central, MINEDUC creó las unidades de Educación Ciudadana, de la Mujer y la unidad de Educación Ambiental, a través de la cual se ha promovido y coordinado diversas iniciativas, como la creación de Comisiones de Educación Ambiental en todas las regiones del país, las que operan descentralizadamente a través de las secretarías regionales de MINEDUC. CONAMA ha definido la realización de una campaña denominada "Chile yo te cuido" como canal de participación permanente y como herramienta para la educación ambiental, mediante el ejercicio de acciones concretas a favor del medio ambiente. La campaña, de cobertura nacional, tuvo para el período 1998-2000 cuatro programas, orientados a impulsar cambios de conducta frente al impacto ambiental de los hábitos de consumo y a producir acciones periódicas, participativas y directas de la comunidad y de sus distintas organizaciones, en especial en las áreas urbanas; motivar a niños y jóvenes a suscribir un conjunto de principios y tareas de cuidado y protección del medio ambiente, así como el ejercicio responsable del control ético ambiental. Algunos componentes de esta campaña contemplan la distribución gratuita y personalizada de una publicación mensual con una separata de material de apoyo pedagógico dirigido al profesorado que conduce las actividades de las brigadas ecológicas y talleres ambientales escolares en todo el país. Paralelamente CONAMA informa y educa a los niños a través de un sitio web especial, en el cual se entregan antecedentes respecto a los principales componentes del medio ambiente, la importancia de su protección y las acciones que se pueden realizar para su conservación. Además de los programas de capacitación administrados por SENCE ya mencionados en los capítulos sectoriales, MINEDUC realiza también proyectos de capacitación en educación ambiental para el profesorado.

Investigación y tecnologías: No hay información disponible.

Financiación: Ver bajo **Adopción de decisiones**.

Cooperación: No hay información disponible.

CAPÍTULO 37: MECANISMOS NACIONALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD NACIONAL EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Este capítulo ha sido cubierto bajo el sub-tema **Cooperación** en los capítulos anteriores.

* * *

CAPÍTULO 38: ARREGLOS INSTITUCIONALES INTERNACIONALES

Este capítulo trata de actividades realizadas por las Naciones Unidas.

* * *

CAPÍTULO 39: INSTRUMENTOS Y MECANISMOS JURÍDICOS INTERNACIONALES

Adopción de decisiones: Chile se reinsertó en el ámbito de la cooperación oficial en 1990, con la creación de AGCI, actualmente dependiente del Ministerio de RREE, cuya misión es apoyar los planes, programas, proyectos y actividades de desarrollo que impulse el país, mediante la captación, prestación y administración de recursos de cooperación internacional.

Como contrapartida, en 1993 se establece el Programa de Cooperación Horizontal, orientado a la transferencia de recursos, principalmente conocimientos nacionales, a países de igual o menor desarrollo relativo, con los objetivos de proyectar las experiencias y capacidades nacionales hacia el exterior; colaborar en los procesos de desarrollo y la estabilidad de los países de la región, velando por la profundización de su democracia, la equidad y la sustentabilidad; y retroalimentar las capacidades técnicas chilenas a la luz de su incursión internacional. El programa opera a través de un presupuesto anual del Gobierno, aprobado por el parlamento, otorgando asistencia técnica, financiamiento para pasantías, cursos y seminarios y becas de post-grado en universidades chilenas. Se ha definido como regiones prioritarias de esta cooperación Centro América, Cuba, Haití y República Dominicana, el Caribe Anglófono, América del Sur (con énfasis en Ecuador, Paraguay, Bolivia y Perú) y acciones compartidas con reciprocidad con países de un desarrollo igual o superior (Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, México).

Programas y proyectos: No hay información disponible.

Situación general: La imagen de éxito económico, institucional y político con la que se asocia a Chile, ha significado, por una parte, que actualmente el país no califique como receptor neto de cooperación internacional; y por otro, la persistencia de necesidades pendientes en la estructura socioeconómica nacional, junto con la carencia de recursos suficientes para atender a los sectores más desposeídos, ha impedido que Chile se constituya en un donante neto de cooperación. De hecho, la demanda creciente de cooperación excede las posibilidades reales que tiene el país para satisfacerlas sólo con recursos propios. Lo anterior, sumado a la experiencia en Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) impulsada en América Latina y El Caribe por AGCI en los últimos años, ha permitido al país interiorizarse de la realidad y procesos que se desarrollan en la región; ha posibilitado que Chile participe como gestor importante dentro de la región para la implementación de nuevos instrumentos de cooperación internacional, como la cooperación triangular. En 1988, AGCI gestionó 11 proyectos de cooperación triangular, por un monto total de 1.385.473 dólares, de los cuales el aporte de AGCI fue el 25 por ciento, participando como aportantes Finlandia, Japón, Suecia y la OEA, además de Guatemala y Nicaragua, que también eran países beneficiarios, junto con Bolivia, Chile y Honduras.

Asimismo, a través de la Cooperación Técnica Horizontal, proyecta las capacidades científicas, tecnológicas e institucionales de Chile en el exterior, contribuyendo a la inserción internacional del país y al logro de los objetivos de la política exterior. Las principales gestiones realizadas por AGCI durante el período 1990-1998 se centraron en el apoyo a los programas gubernamentales destinados a la erradicación de la extrema pobreza, la promoción de la equidad social y de género, el cuidado del medio ambiente, la modernización del Estado, la transferencia y adaptación de tecnologías y la descentralización administrativa, entre otros. La exitosa experiencia como país receptor de cooperación bilateral y multilateral (aproximadamente 1200 millones de dólares en créditos concesionales, cooperación financiera no reembolsable y asistencia técnica), ha permitido el fortalecimiento y modernización de varias instituciones nacionales, las que han alcanzado estándares internacionales.

Entre las fuentes tradicionales de cooperación, cabe destacar los proyectos conjuntos con países tales como Alemania, Canadá, Flandes, Holanda, Inglaterra, Japón, Suecia, Suiza, USA y la Unión Europea y con organismos multilaterales como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Banco Mundial. Estos resultados han motivado a que muchas fuentes tradicionales de cooperación hayan manifestado su interés en proyectar la experiencia chilena a través de la replicabilidad de esos proyectos en otros países de la región, con las adaptaciones pertinentes que exige cada caso.

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: No hay información disponible.

Información: No hay información disponible.

Investigación y tecnologías: No hay información disponible.

Financiación: Durante el período 1993-1997 los recursos destinados a cooperación horizontal sumaron 8.911.000 dólares, 59 por ciento de ellos se destinaron a becas y asistencia técnica y el 68 por ciento de la cooperación benefició a Centro América.

* * *

CAPÍTULO 40: INFORMACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE DECISIONES

Adopción de decisiones: No hay información disponible.

Programas y proyectos: No hay información disponible.

Situación general: No hay información disponible.

Capacitación, educación, formación y toma de conciencia: No hay información disponible.

Investigación y tecnologías: No hay información disponible.

Financiación: No hay información disponible.

Cooperación: No hay información disponible.

* * *

CAPÍTULO: INDUSTRIA

Este capítulo no se encuentra disponible.

* * *

CAPÍTULO: TURISMO SUSTENTABLE

Este capítulo no se encuentra disponible.

* * *
